

Capítulo VII

Crisis estatal y época de revolución

Crisis de estado y sublevaciones indígena-plebeyas en Bolivia*

Fue Kant quien definió el Estado como una unión de personas que se proponen vivir jurídicamente, entendido esto como despliegue de la libertad bajo una ley y una coacción universal⁴¹³. Más allá de ver al Estado como la idea del derecho en acto, lo que aquí interesa resaltar es la concepción del Estado como el “yo común” del sistema de libertades que posee una sociedad. Sin embargo, fue Marx el que nos llamó la atención sobre el carácter ilusorio de esta comunidad⁴¹⁴. No es que el Estado no sea un resumen de la colectividad, lo que sucede es que es una síntesis enajenada en tanto transfigura los conflictos internos de la sociedad bajo la apariencia de la autonomía de las funciones estatales. De ahí que se puede decir que el Estado es una síntesis de la sociedad, pero una síntesis cualificada por la parte dominante de esa sociedad⁴¹⁵.

En los últimos años, la escuela derivacionista y regulacionista⁴¹⁶ ha trabajado, precisamente, los procesos sociales mediante los cuales las estructuras estatales modernas, y sus ámbitos de autonomía política, responden a las distintas maneras de configuración de los procesos productivos, a los modos de gestión de la fuerza de trabajo y a la propia articulación de las redes transnacionalizadas de los circuitos del capital social planetario. Esto significa que cuando hablamos del Estado, estamos hablando de algo que es mucho más que un conjunto de instituciones, normas o procedimientos políticos, pues en el fondo, el Estado es una relación social conflictiva que atraviesa al conjunto de toda la sociedad en los modos en que realiza la continuidad de su sistema de necesidades (propiedad, impuestos, moneda, derechos laborales, créditos, etc.) y en el modo en que representa la articulación entre sus facultades políticas y sus actividades cotidianas.

* En *Memorias de Octubre*, 2004 (La Paz: Comuna/Muela del Diablo).

⁴¹³ Kant, I. 1951 *Crítica de la razón práctica* (Buenos Aires: El Ateneo).

⁴¹⁴ Marx, K. 1981 “De la crítica de la filosofía del derecho de Hegel”, en *Obras Fundamentales* (México: FCE).

⁴¹⁵ Zavaleta, R. 1989 *El estado en América Latina* (La Paz: Los Amigos del Libro).

⁴¹⁶ Boyer, R. y Saillard, R. 1990 *Théorie de la régulation. L'état des savoirs* (París: La Découverte).

Álvaro García Linera

Esta manera de ver al Estado como totalidad fue sistematizada por Gramsci, quien propuso el concepto de Estado en su “sentido integral” como la suma de la sociedad política y la sociedad civil, recogiendo, a su modo, el legado hegeliano de que la sociedad civil es el momento constitutivo del Estado que, a su vez, mediante el andamiaje de sus instituciones, sintetiza el ideal de eticidad de una colectividad, esto es, las costumbres, valores y creencias que los miembros de una sociedad comparten⁴¹⁷.

La importancia de las creencias como elemento fundamental en la constitución del poder político es lo que llevó a Durkheim a ver al Estado como “el órgano mismo del pensamiento social y, sobre todo, el órgano de la disciplina moral”, lo que, sin embargo, no debe hacernos olvidar el ámbito de la “violencia organizada” como núcleo del poder estatal⁴¹⁸. Coerción y creencia, ritual, institución y relación, sociedad civil y sociedad política son por tanto elementos constitutivos de la formación de los estados. Weber sintetizará esta composición del hecho estatal a través de la definición del Estado como una organización política continua y obligatoria que mantiene el monopolio del uso legítimo de la fuerza física⁴¹⁹.

Esto significa que hay Estado no sólo cuando en un territorio unos funcionarios logran monopolizar el uso de la coerción física, sino también cuando ese uso es legítimo, esto es, cuando se asienta en la creencia social la legalidad de tal monopolio, lo que a su vez supone, a decir de Bourdieu, un monopolio paralelo, el de la violencia simbólica, que no es otra cosa que la capacidad de imponer y consagrar, en las estructuras mentales de las personas, sistemas cognitivos, principios de visión y división del mundo considerados evidentes, válidos y legítimos por los miembros de una sociedad⁴²⁰.

Crisis de Estado

Ahora bien, como lo ha mostrado Elias, estos monopolios que dan lugar a los estados son procesos históricos que necesitan reproducirse continuamente⁴²¹.

⁴¹⁷ Gramsci, A. 1975 *Notas sobre Maquiavelo, sobre política y sobre el estado moderno* (México: Juan Pablo); Hegel, W. 1975 *Fundamentos de la filosofía del derecho* (Buenos Aires: Siglo Veinte).

⁴¹⁸ Durkheim, E. 1985 *La división del trabajo social* (México: Premiá).

⁴¹⁹ Weber, M. 1987 *Economía y sociedad* (México: FCE).

⁴²⁰ Bourdieu, P. 1997 *Razones prácticas* (Barcelona: Anagrama).

⁴²¹ Elias, N. 1987 *El proceso de la civilización* (Barcelona: FCE).

Crisis estatal y época de revolución

De tal manera que la estatalidad de la sociedad no es un dato, un hecho fijo sino un movimiento. Este monopolio del “capital de fuerza física” y del “capital de reconocimiento” que da lugar al Estado genera a su vez otro capital, el “capital estatal”, que es un poder sobre las distintas especies de capital (económico, cultural, social, simbólico), sobre su reproducción y sus tasas de reconversión, por lo que el escenario de disputas y competencias sociales en el Estado, son en el fondo confrontaciones sociales por las características, el control y direccionalidad de este capital estatal burocráticamente administrado.

En síntesis, en términos analíticos es posible distinguir en la organización del Estado al menos tres componentes estructurales que regulan su funcionamiento, estabilidad y capacidad representativa. El primero es el *armazón de fuerzas sociales*, tanto dominantes como dominadas, que definen las características administrativas y la dirección general de las políticas públicas. Todo Estado es una síntesis política de la sociedad, sólo que jerarquizada en coaliciones de fuerzas que poseen una mayor capacidad de decisión (capital estatal-burocrático), y otras fuerzas compuestas por grupos que tienen menores o escasas capacidades de influencia en la toma de decisiones de los grandes asuntos comunes. En ese sentido, los distintos tipos o formas estatales corresponden analíticamente a las distintas etapas históricas de regularidad estructural de la correlación de fuerzas que siempre son resultado y cristalización temporal de un corto período de conflagración intensa, más o menos violento de fuerzas sociales que disputan la reconfiguración de las posiciones y la toma de posición en el control del capital estatal.

En segundo lugar, está *el sistema de instituciones*, de normas, y reglas de carácter público mediante las cuales todas las fuerzas sociales logran coexistir, jerárquicamente, durante un período duradero de la vida política de un país. En el fondo, este sistema normativo de incentivos, de señales, prohibiciones y garantías sociales que se objetiva por medio de instituciones, es una forma de materialización de la correlación de fuerzas fundante que dio lugar a un tipo de régimen estatal y que, a través de este marco institucional, se reproduce por medios legales.

Como tercer componente de un régimen de Estado está el sistema de *creencias movilizadoras*. En términos estrictos, todo Estado, bajo cualquiera de sus formas históricas, es una estructura de categorías de percepción y de pensamientos comunes, capaces de conformar, entre sectores sociales gobernados y gobernantes, dominantes y dominados, un conformismo social y moral sobre

Álvaro García Linera

el sentido del mundo que se materializa mediante los repertorios y ritualidades culturales del Estado⁴²².

Cuando estos tres componentes de la vida política de un país muestran vitalidad y un funcionamiento regular, hablamos de una correspondencia óptima entre régimen estatal y sociedad. Cuando alguno o todos estos factores se estancan, se diluyen o se quiebran de manera irremediable, estamos ante una *crisis de Estado* manifiesta en el divorcio y antagonismo entre el mundo político, sus instituciones, y el flujo de acciones de las organizaciones civiles. Esto es precisamente lo que viene sucediendo en Bolivia desde hace tres años. Lo más llamativo de esta crisis estatal es que a diferencia de las que cíclicamente se repiten cada quince o veinte años, la actual crisis de Estado presenta una doble dimensión. Parafraseando a Braudel podemos decir que hoy se manifiesta la crisis de una estructura estatal de “larga duración” y otra de “corta duración”. La primera tiene que ver con un deterioro radical y cuestionamiento de las certidumbres societales, institucionales y cognitivas que atraviesan de manera persistente los distintos ordenamientos estatales de la vida republicana, a las que llamaremos *estructuras de invariancia estatal*, en tanto que la crisis de “corta duración” hace referencia al modo “neoliberal” o reciente de configuración del Estado, al que llamaremos *estructuras estatales temporales* que pese a sus variadas formas históricas, utilizan, moldean y dejan en pie sistemas de poder que dan lugar a las estructuras invariantes. Veamos brevemente cómo se manifiesta esto.

1- La trama de las fuerzas sociales

Desde mediados de la década del ochenta del siglo anterior, la constitución del armazón de fuerzas colectivas que dieron lugar al llamado Estado “neoliberal-patrimonial” contemporáneo en Bolivia, tuvo como punto de partida la derrota política y cultural del sindicalismo obrero articulado en torno a la COB⁴²³, que representaba la vigencia de múltiples prerrogativas plebeyas en la

⁴²² Joseph, G. y Nugent, D. (comps.) 2002 *Aspectos cotidianos de la formación del Estado* (México: ERA).

⁴²³ Central Obrera Boliviana, organización de obreros de gran empresa de distintos ramos productivos que durante décadas logró articular un amplio frente de clases trabajadoras de la ciudad y el campo. Después de los procesos de flexibilización laboral, cierre de empresas y privatización implementados desde 1985, su base social de movilización se redujo a profesores, trabajadores de hospitales públicos, estudiantes universitarios y algunos gremios urbanos.

Crisis estatal y época de revolución

administración del excedente social y en la gestión del capital estatal (ciudadanía sindical, cogestión obrera, etc.). Sobre esta disgregación del sindicalismo adherido al Estado es que se consolidó un bloque social compuesto por fracciones empresariales vinculadas al mercado mundial, partidos políticos, inversionistas extranjeros y organismos internacionales de regulación que ocuparon el escenario dominante de la definición de las políticas públicas.

Durante quince años, la toma de decisiones en gestión pública (reformas estructurales de primera y segunda generación, privatizaciones, descentralización, apertura de fronteras, legislación económica, reforma educativa, etc.), tuvo como único sujeto de decisión e iniciativa a estas fuerzas sociales que reconfiguraron la organización económica y social del país bajo promesas de modernización y globalización.

En la actualidad, esta composición de fuerzas se ha agrietado de manera acelerada. Por una parte, la desorganización y despoltización del tejido social que generó la inermidad de las clases subalternas y la garantía de la aristocratización del poder estatal durante quince años, ha sido revertida. Los bloqueos de abril/septiembre del 2000, julio del 2001 y junio del 2002 señalan una reconstitución regional de diversos movimientos sociales con capacidad de imponer, sobre la base de la fuerza de su movilización, políticas públicas, régimen de leyes y hasta modificaciones relevantes de la distribución del excedente social. Leyes como la 2029, el anteproyecto de Ley de Aguas que buscaban redefinir el uso y propiedad del recurso líquido, las adjudicaciones de empresas estatales a manos privadas, la aplicación del impuesto al salario, etc., han sido anuladas o bien modificadas extra-parlamentariamente por los bloqueos de los movimientos sociales y los levantamientos populares. Decretos presidenciales como el cierre del mercado de acopio de la coca o de interdicción en los Yungas, han tenido que ser abolidos por el mismo motivo, en tanto que artículos de las leyes financieras han sido cambiados en función de las demandas corporativas o nacionales de grupos sociales organizados (CSUTCB⁴²⁴, vendedores, jubilados, campesinos

⁴²⁴ Organización de comunidades indígenas y campesinas fundada en 1979. Partiendo de unas "células de base", las comunidades indígenas, tiene niveles de articulación a nivel local, regional y nacional con una gran capacidad de movilización especialmente en las zonas de valles y altiplano donde existe una centenaria tradición organizativa indígena. Portador de un discurso de reivindicación nacional indígena, su actual dirigente máximo, Felipe Quispe, propugna la indianización de la sociedad boliviana y la necesidad de un gobierno dirigido por indígenas.

Álvaro García Linera

cocaleros, cooperativistas mineros, policías, etc.), mostrando la emergencia de bloques sociales compuestos que, al margen del parlamento, y ahora con apoyo en él, tienen la fuerza de frenar la implementación de políticas gubernamentales, de cambiar leyes y de imponer, por métodos no parlamentarios, determinadas demandas y redistribuciones de los recursos públicos. Lo importante de estas fuerzas emergentes es que por las características de su composición interna (plebeyas, indígenas) y de sus demandas aglutinadoras, son bloques sociales anteriormente excluidos de la toma de decisiones, que al tiempo de autorrepresentarse buscan modificar sustancialmente las relaciones económicas, con lo que su reconocimiento como fuerza de acción colectiva pasa obligatoriamente por una transformación radical de la coalición social con capacidad de control del capital estatal y del uso de los bienes públicos, esto es, de la forma estatal dominante en las últimas décadas que se sostuvo sobre estrategias de marginación e individuación de las clases subalternas.

Pero además, y esto es lo más notable de los actuales procesos de reconstitución de los movimientos sociales, las fuerzas de acción colectiva más compactas, influyentes y dirigentes son indígenas, entendido esto como una comunidad cultural diferenciada y un proyecto político. A diferencia de lo que sucedió desde los años treinta del siglo XX, cuando los movimientos sociales fueron articulados en torno al sindicalismo obrero portador de un ideario de mestizaje y resultante de la modernización económica de las elites empresariales, hoy los movimientos sociales con mayor poder de interpelación al ordenamiento político son de base social india, emergentes de las zonas agrarias bloqueadas o marginadas de los procesos de modernización económica impulsados desde el Estado. Los aimaras del altiplano, los cocaleros de los Yungas y el Chapare, los *ayllus* de Potosí y Sucre, los indígenas del oriente han desplazado en el protagonismo social a los sindicatos obreros y organizaciones populares urbanas. Y, a pesar del carácter regional o local de sus acciones, comparten una misma matriz identitaria indígena que interpela el núcleo invariante del Estado boliviano desde hace 178 años: su mono-etnicidad. El Estado boliviano, en cualquiera de sus formas históricas, se ha caracterizado por el desconocimiento de los indios como sujetos colectivos con prerrogativas gubernamentales. Y el que hoy aparezcan los indios de manera autónoma como principal fuerza de presión demandante pone en cuestión, precisamente, la cualidad estatal, heredada de la colonia, de concentrar la definición y control del capital estatal en bloques sociales culturalmente homogéneos y diferenciados de las distintas comuni-

Crisis estatal y época de revolución

dades culturales indígenas que existieron antes que hubiera Bolivia, y que incluso ahora siguen constituyendo la mayoría de la población⁴²⁵.

Por otra parte, la propia alianza de las elites económicas dominantes muestra claros signos de fatiga y conflicto interno debido a que hay un estrechamiento de los marcos de apropiación del excedente económico resultante de la crisis internacional y los límites financieros del Estado liberal (privatización de empresas públicas, externalización del excedente, erradicación de la hoja de coca, contracción de la masa tributaria por el incremento de la precariedad). En un ambiente marcado por el pesimismo a largo plazo, cada una de las fracciones del poder comienza a jalar para su lado enfrentándose a las demás (reducción de las ganancias transferidas al estado por las empresas capitalizadas, rechazo de las empresas petroleras y procesadoras de carburantes de modificar los precios de compra del petróleo, renegociación del precio del gas al Brasil, rechazo al pago de impuestos a la tierra, etc.), resquebrajándose así la unidad de destino compartido que había garantizado, en la última década, la formación de la coalición social en el monopolio del capital estatal.

Pero además, en términos de los patrones de largo aliento o de invariancia epocal de las estructuras sociales, un elemento que está presente como telón de fondo de la crisis del bloque empresarial de poder y de la propia insurgencia de los actuales movimientos sociales, surgidos de los márgenes de la modernidad capitalista, es el carácter primario exportador⁴²⁶ y de enclave de la economía boliviana. El que la modernidad industrial se presente como pequeñas islas en un mar de fondo de informalidad y economía campesina semi-mercantil, si bien puede echar para abajo los costos salariales, limita la formación de un mercado interno capaz de diversificar la actividad empresarial de valor agregado, además de convertir en endémica su vulnerabilidad a las fluctuaciones del precio mundial de materias primas, secularmente a la baja. En ese sentido, se puede decir que la crisis estatal de “larga duración” es el correlato político de una crisis económica igualmente de “larga duración” de un patrón de acumulación primario exportador incapaz de retener productivamente los excedentes y, por tanto, sin posibilidades de disponer internamente de volúmenes de riqueza necesarios para construir duraderos procesos de cohesión social y adscripción estatal.

⁴²⁵ INE 2002 *Censo nacional de población y vivienda 2001* (La Paz).

⁴²⁶ Valenzuela, J. 1990 *¿Qué es un patrón de acumulación?* (México: UNAM).

Álvaro García Linera

No se debe olvidar que las construcciones nacionales modernas, como hechos de unificación cultural y política, se levantan sobre procesos exitosos de retención y redistribución del excedente industrial-mercantil; de ahí que las propuestas de autonomía departamental de los Comités Cívicos, cíclicamente reivindicada cada vez que hay una renta hidrocarburífera a disponer, o de autogobierno indígena con la que distintos grupos sociales regionales cuestionan la configuración del bloque de poder estatal y el ordenamiento institucional, develan a su modo las fallas de un orden económico de larga data que en los últimos años sólo ha exacerbado sus componentes más elitistas, mono-productivos y externalizables en el mercado mundial.

2- Régimen de instituciones políticas

Durante los últimos dieciocho años, junto con la división de poderes y la centralidad parlamentaria, los partidos políticos han adquirido mayor importancia en la organización de la institucionalidad gubernamental. Apoyados en el reconocimiento otorgado autoritariamente por el Estado, pues por sí mismos nunca fueron relevantes, los partidos han pretendido sustituir el antiguo régimen de mediación política desempeñado por los sindicatos que recogía la herencia colectivista de las sociedades tradicionales con el moderno corporativismo del obrero de oficio de gran empresa.

Sistema de partidos, elecciones y democracia representativa, son hoy, los mecanismos por medio de los cuales se ha definido prescriptivamente el ejercicio de las facultades ciudadanas.

Sin embargo, está claro que los partidos no han logrado convertirse en mecanismos de mediación política, esto es, en vehículos de canalización de las demandas de la sociedad hacia el Estado. Las investigaciones sobre el funcionamiento de los partidos y las propias denuncias de la opinión pública muestran que ellos son, ante todo, redes familiares y empresariales mediante las cuales se compite por el acceso a la administración estatal como si de un bien patrimonial se tratara, y en los que los modos de vinculación con la masa votante está organizada básicamente en torno a vínculos clientelares y prebendales⁴²⁷.

⁴²⁷ Chaves, P. 2000 "Los límites estructurales de los partidos de poder como estructuras de mediación democrática: Acción Democrática Nacionalista", Tesis de Licenciatura, Carrera de Sociología, La Paz.

Crisis estatal y época de revolución

De esta manera, destruida la ciudadanía sindical del Estado nacionalista, pero apenas asomada una nueva ciudadanía política moderna de tipo partidaria y electiva, la sociedad ha empezado a crear o a retomar otras formas de mediación política, otras instituciones de ejercicio de representación, organización y movilización política al margen de los partidos. Éstos son los nuevos, y viejos, movimientos sociales con sus tecnologías de deliberación, del asambleísmo, cabildeo y acción corporativa, y de ahí que se pueda afirmar que en términos de sistemas institucionales hoy en Bolivia existen dos campos políticos. En regiones como el Chapare, Yungas y Norte de Potosí, la institucionalidad de comunidades se halla sobrepuesta no sólo a la organización partidaria, sino también a la propia institucionalidad estatal, en la medida en que alcaldes, corregidores y subprefectos están subordinados de facto a las federaciones campesinas. En el caso del altiplano norte, varias subprefecturas y puestos policiales provinciales han desaparecido en los últimos tres años debido a las movilizaciones; en capitales provinciales se han creados “policías comunitarias” que resguardan el orden público en nombre de la Federaciones Campesinas y, de manera recurrente, cada vez que hay un nuevo bloqueo, cientos de comunidades altiplánicas erigen lo que ellas denominan el Gran Cuartel Indígena de Q’alachaca, que es una especie de confederación circunstancial de *ayllus* y comunidades en estado de militarización.

Ciertamente que todo ello tiene que ver con lo que alguna vez Zavaleta denominó el “Estado aparente”, en el sentido en que por la diversidad societal o civilizatoria del país, amplios territorios y numerosas poblaciones de lo que hoy denominamos Bolivia son portadoras de formas de producir que no han interiorizado como hábito y reforma técnica de los procesos laborales la racionalidad capitalista, tienen otra temporalidad de las cosas, poseen otros sistemas de autoridad y de lo público, enarbolan fines y valores colectivos diferenciados a los que el Estado oferta como concepción del mundo y destino⁴²⁸. Esto que es una constante de la historia de los distintos estados bolivianos, hoy atraviesa procesos de auto-unificación institucional creciente, tanto coercitivos como simbólicos, bajo la forma de nacionalismos e identidades étnicas que están dando lugar a una dualización de los sistemas políticos y principios de autoridad, en algunos casos de manera permanente (territorios agrario-indígenas politizados) y en

⁴²⁸Tapia, L. 2002 *La condición multisocietal* (La Paz: CIDES/Muela del Diablo).

Álvaro García Linera

otros, esporádicos (zonas urbanas de Cochabamba, La Paz y El Alto). Resulta entonces que el Estado neoliberal ha comenzado a tener frente a él órdenes institucionales fragmentados y regionales que le arrebatan el principio de autoridad gubernativa y la lógica de acción política; pero simultáneamente esta otra institucionalidad, en la medida en que está anclada en los saberes colectivos de aquella parte del mundo indígena ubicado al margen de la subsunción real o, si se prefiere, del capitalismo como racionalidad técnica, es una institucionalidad basada en normas, procedimientos y culturas políticas tradicionales, corporativas no-liberales que está poniendo en entredicho la centenaria simulación histórica de una modernidad y liberalidad política estatal de texto e institución que ni siquiera es acatada por las *elites* proponentes que, pese a todo, no han abandonado jamás el viejo método de la política señorial y patrimonial. La corrupción generalizada en el aparato de Estado que hoy ha llegado a afectar la propia legitimidad gubernamental no es más que la representación modernizada del antiguo hábito prebendal y patrimonial con el que las elites en el poder asumen, entienden y producen la función estatal.

La cultura política liberal y las instituciones liberales que hoy en día son rebasadas por los movimientos sociales, y dejadas de lado en el comportamiento real de las elites en el poder, son un sistema de valores y procedimientos que presuponen la individuación de la sociedad, esto es, la disolución de las fidelidades tradicionales, las relaciones señoriales y los sistemas productivos no-industriales, cosa que en Bolivia apenas acontece, en el mejor de los casos, con un tercio de la población. Sin embargo, pese a este “abigarramiento” de una sociedad que estructural y mayoritariamente no es industrial ni individuada, el Estado, en todas sus formas republicanas, incluso el “neoliberal”, en un tipo de esquizofrenia política, ha construido regímenes normativos liberales, instituciones modernas que no corresponden, sino como sobreposición hipostasiada, a la lógica real de la dinámica social. De ahí que la institucionalidad generalizada de los movimientos sociales indígenas y plebeyos que privilegian la “acción normativa” por sobre la “acción comunicativa”⁴²⁹ cuestione la validez de una institucionalidad estatal republicana que aparenta modernidad en una sociedad que carece, y aún esta privada, de las bases estructurales y materiales de esa modernidad imaginada.

⁴²⁹ Habermas, J. 1992 *Teoría de la acción comunicativa* (Barcelona: Taurus) Tomo II.

Crisis estatal y época de revolución

Por último, otro momento paradigmático de este eclipse institucional del Estado “neoliberal”, y potencialmente repetible a mayor escala, ha acontecido recientemente cuando las instituciones armadas del Estado, que son su núcleo sustancial y final, se han enfrentado en las inmediaciones de la casa de gobierno. Con ello no sólo se ha derrumbado la estructura de mandos y fidelidades que dan continuidad y verificabilidad al espíritu de Estado, no sólo se ha disuelto el principio de cohesión y unicidad estatal, que es algo así como el instinto de preservación básico de cualquier Estado, sino que además no se ha podido ejercer el mandato fiscal que, a decir de Elias, es el monopolio que sostiene el monopolio de la violencia y ambos, al Estado.

3- Matriz de creencias sociales movilizadoras

Por más de una década y media, los “dispositivos de verdad” que articulaban expectativas, certidumbres y adherencias prácticas de importantes sectores de la población, fueron las ofertas de libre mercado, privatización, gobernabilidad y democracia liberal representativa.

Todas estas propuestas fueron ilusiones bien fundadas, pues si bien en verdad nunca lograron materializarse de manera sustancial, permitieron realinear el sentido de la acción y las creencias de una sociedad que imaginó que, por medio de ello, y los sacrificios que requería, se iba a lograr el bienestar, la modernidad y el reconocimiento social. Clases altas, clases medias y subalternas urbanas, estas últimas vaciadas de las expectativas y adherencias al Estado protector y al sindicato por centro de trabajo, creyeron ver en esta oferta de modernización una nueva vía de estabilidad y ascenso social, dando lugar así a un nuevo espacio de apetencias, grandezas y competencias individuales consideradas como legítimas.

Hoy, a quince años de esta apuesta colectiva y frente a una creciente brecha entre expectativas imaginadas y realidades obtenidas, se ha generado una población defraudada y en proceso de divorcio social con respecto a la emisión estatal, que está empujando a un pesimismo social, en unos casos; en otros, a una atracción por diferentes convicciones emitidas al margen del Estado, o que desconocen abiertamente una buena parte del régimen de rutinas y rituales de la dominación estatal.

La modernidad anunciada se ha traducido en el regreso a formas de extracción de plusvalía absoluta y a un incremento de la informalidad laboral del 55%

Álvaro García Linera

al 68% en veinte años. La promesa de ascenso social sólo ha producido una mayor concentración de la riqueza y una reactualización de la discriminación étnica en los capitales legítimos para el ascenso a los espacios de poder. La privatización, lejos de ampliar el mercado interno, se ha convertido en la pérdida del mayor excedente económico de los últimos cincuenta años (los hidrocarburos) y la extranjerización acelerada de los débiles ahorros sociales.

El sistema de convicciones y esquemas mentales que permitió articular gobernantes con gobernados muestra hoy un acelerado proceso de agotamiento por la imposibilidad material de mostrarse verificable, dando lugar nuevamente a un estado de disponibilidad cultural de la población hacia nuevas fidelidades y creencias movilizadoras. De hecho, nuevos discursos que han contribuido a la erosión de las certidumbres estatales, hoy comienzan a hallar receptividad en amplios grupos sociales que empiezan a utilizar esas propuestas como ideas fuerza, esto es, como creencias en torno a las cuales están dispuestos a entregar tiempo, esfuerzo y trabajo para su materialización y que, como en zonas del altiplano aimara, comienzan a promover modos de escenificación y ritualización alternativas de poder y mando (sustitución de banderas bolivianas por *wiphalas* indígenas, el chicote y bastón de mando en vez del escudo como símbolos de poder, etcétera).

Entre las nuevas ideas-fuerza con carácter expansivo que comienzan a aglutinar a sectores sociales está la reivindicación nacional-étnica del mundo indígena, que ha permitido el avance de un tipo de nacionalismo indígena en el sector aimara del altiplano y la constitución de una izquierda electoralmente exitosa a la cabeza de caudillos indios en las pasadas elecciones generales. Otras propuestas, como la recuperación estatal de los recursos públicos privatizados y la ampliación de la participación social y la democracia a través del reconocimiento de prácticas políticas no liberales de corte corporativo, asambleístico y tradicionales (comunidad indígena, sindicato, etc.), son convicciones que están desplazando las fidelidades liberales y privatizadoras emitidas por el Estado.

Se puede decir que el Estado ha perdido el monopolio del capital de reconocimiento y hoy, al menos por un tiempo, se está atravesando un período de transición de las estructuras cognitivas con efecto de adherencia y movilización de masa. Lo notable de esta mutación cognitiva es que una parte de las nuevas creencias articuladoras de las convicciones sociales, al tiempo de que-rellarse con los discursos de modernidad neoliberal, afectan también las certidumbres últimas y primarias del ideario republicano del Estado, como es la

Crisis estatal y época de revolución

creencia de una desigualdad sustancial entre indígenas y mestizos o el convencimiento de que los indios no están capacitados para gobernar el país. El que los indios, acostumbrados a entregar su voto a los *mistis* (mestizos), en 2002 hayan votado ampliamente por indios, que los líderes sociales sean indígenas o que las nuevas izquierdas estén acaudilladas ahora por indios, habla ciertamente de un cataclismo de las estructuras simbólicas de una sociedad profundamente colonial y racializada en su manera de significar y ordenar mentalmente el mundo.

En conjunto está claro que en Bolivia los tres pilares de la estructura estatal “neoliberal” y en general estatal republicana, muestran un deterioro creciente, y es esta sobreposición de crisis estatales lo que ayuda a explicar la radicalidad de la conflictividad política, pero también la complejidad y su irresolución en términos de construcción de hegemonía urbana por parte de las fuerzas sociales indígenas, en la medida en que es allí donde lo indígena encuentra mayores espacios de hibridez o disolución frente a la constitución, no exenta de ambigüedades y contramarchas, de una identidad cultura mestiza, tanto de elite como popular.

Con todo, es sabido que las crisis estatales no pueden durar mucho porque no hay sociedad que soporte largos períodos de incertidumbre y vacío de articulación política. Más pronto que tarde habrá una recomposición duradera de fuerzas, creencias e instituciones que abrirán un nuevo período de estabilidad estatal. La pregunta que queda pendiente es si esta mutación estatal vendrá por el lado de un incremento del autoritarismo de las fracciones en el poder, con lo que entraríamos en algo así como a un “Estado neoliberal autoritario” como nueva fase estatal que tal vez podría sobreponerse a la crisis de “corta duración”, pero no así a la de “larga duración”, con lo que los problemas volverían a manifestarse en un tiempo breve; o si, por el contrario, habrá una apertura de nuevos espacios de ejercicio de derechos democráticos (Estado multicultural, institucionalidad combinada entre liberalismo y comunitarismo-indígena) y redistribución económica (papel productivo del Estado, autogestión, etc.) capaces de afrontar, mediante la ampliación de los sujetos y la institucionalidad estatal, las dos dimensiones de la crisis. En este último caso, los hechos políticos parecen haberse engarzado de tal manera que una resolución democrática de la crisis estatal neoliberal pasa inevitablemente por una simultánea resolución multicultural de la crisis de la colonialidad del Estado republicano.

Álvaro García Linera

Los clivajes étnico-clasistas de la crisis estatal

Fue Zavaleta quien afirmó que las hegemonías también se cansan, que es lo mismo que decir que hay momentos en que el Estado deja de ser irresistible y que la masa se separa de los marcos cognitivos que la llevaron a *desear* su realidad tal como las elites de poder *organizaban* la subalternidad de la plebe, abriendo así un período de crisis de Estado, pues no hay Estado que se precie de tal, que no garantice su perdurabilidad en la concordancia moral entre las estrategias de reproducción de las elites gobernantes y las apetencias y tolerancias de los subalternos. Esto significa que el Estado es ante todo una maquinaria de producción de ideología, de esquemas simbólicos de legitimación de los monopolios del poder. La coerción detentada por el Estado es por tanto sólo la *ultima ratio* de todo poder político, pero aun para serlo debe sostenerse en la legitimidad y unicidad de su propia fuerza, cosa que precisamente se quebró en febrero de 2003 cuando policías y militares se mataban en los alrededores de la plaza Murillo a raíz de un motín policial que rechazaba el incremento de impuestos a los asalariados.

Sin embargo, ha sido la sublevación de octubre de 2003 la expresión máxima de la disidencia de la plebe respecto al Estado “neoliberal-patrimonial” y, por tanto, del agotamiento de esta *forma* estatal, al menos con las características con que la conocimos hasta ahora. Si toda crisis estatal por lo general recorre cuatro etapas (manifestación de la crisis, transición o caos sistémico, surgimiento conflictivo de un nuevo principio de orden estatal, consolidación del Estado), octubre, con sus cientos de miles de indios y plebe urbana sublevada en las ciudades de La Paz y El Alto que culminó con la huida del presidente de la república Sánchez de Lozada, ha marcado ineludiblemente el ingreso a la etapa de la transición. La sucesión constitucional, más que un apego al parlamentarismo, fue el apego popular al viejo prejuicio de la personalización del poder, que consuetudinariamente hace creer a las plebes insurrectas que el cambio de personas es ya un cambio del régimen del poder: pero también hubo una especie de lucidez histórica respecto a las consecuencias posteriores que supondría, en la actual correlación de fuerzas, el cierre de la institucionalidad liberal.

Con todo, si algo supo la gente sublevada en octubre fue su disidencia irreversible con el sistema de creencias hegemónicas del Estado neoliberal. Sin embargo, así como no hay dominación estatal legítima sin el consenso de los dominados, lo que en Bolivia se viene erosionando desde los bloqueos de 2000,

Crisis estatal y época de revolución

no hay tampoco disidencia exitosa sin la capacidad de postular un orden estatal alterno, que es precisamente lo que los insurrectos experimentaron detrás de cada barricada, que fue capaz de paralizar al Estado, pero sin ser ellas mismas un proyecto de poder alterno y legítimo. De ahí esta tregua ambigua y confusa en la que un comunicador ilustrado de las viejas elites canaliza el programa mínimo de los sublevados (renuncia de Sánchez de Lozada, Asamblea Constituyente, nueva ley de hidrocarburos), a la vez que deja en pie todo la maquinaria gubernamental de la reforma neoliberal (capitalización, superintendencia, flexibilización laboral).

Época revolucionaria

Fue Marx quien propuso el concepto de “época revolucionaria”⁴³⁰ para entender los extraordinarios períodos históricos de vertiginosos cambios políticos, de abruptas modificaciones de las posiciones y del poder de las fuerzas sociales, de reiteradas crisis estatales, de recomposición de las clases, de las identidades colectivas, de sus alianzas y de sus fuerzas políticas promovidas por las reiteradas oleadas de sublevación social; por flujos y reflujos de insurgencias sociales, separadas por relativos períodos de estabilidad, pero que a cada paso cuestionan u obligan a modificar, parcial o totalmente, la estructura general de la dominación política.

Una *época revolucionaria* se caracteriza por ser un período relativamente largo, de varios meses o años, de intensa actividad política en la que: a) sectores, bloques o clases sociales anteriormente apáticas o tolerantes con los gobernantes se lanzan abiertamente a desafiar a la autoridad y a reclamar derechos o peticiones colectivas mediante acciones de movilización directa (Coordinadora del Agua y el Gas, CSUTCB, indígenas, vecinos, coccaleros, regantes, etc.); b) una parte o la totalidad de estos sectores movilizados se plantean activamente la necesidad de hacerse con el poder del Estado (MAS⁴³¹, CSUTCB, COB); c)

⁴³⁰ Marx y Engels 1981 *Sobre la revolución de 1848-1849* (Moscú: Progreso).

⁴³¹ “Movimiento al Socialismo” es la organización política liderizada por el dirigente indígena-campesino Evo Morales. Más que un partido, en sentido estricto es una coalición electoral de múltiples movimientos sociales urbano-rurales que en base a la decisión de asambleas de comunidades y sindicatos pudo introducir un elevado número de diputados en el parlamento, convirtiéndose en la segunda fuerza electoral del país desde julio del 2002.

Álvaro García Linera

surge un apoyo y adhesión a esas propuestas de sectores importantes de la ciudadanía a estas pretensiones (cientos de miles de movilizados en la guerra del agua, en contra del impuestazo, en la guerra del gas, en las elecciones apoyando candidaturas indias), con lo que la separación entre gobernantes, que toman decisiones, y gobernados, que acatan esas decisiones, comienza a disolverse por la creciente participación de la masa en asuntos políticos; y d) incapacidad de parte de los gobernantes de neutralizar esas aspiraciones políticas con la consiguiente polarización del país en varias “soberanías múltiples”⁴³² que fragmentan la sociedad (el famoso principio de “autoridad” extraviado, hasta hoy, en abril de 2000).

En las *épocas revolucionarias* la sociedades se fragmentan en coaliciones de bloques sociales poseedores de propuestas, discursos, liderazgos y programas de poder político antagónicos e incompatibles entre sí, dando lugar a “ciclos de protesta”⁴³³ u oleadas de movilizaciones, seguidas de repliegues y momentos de retroceso y estabilidad, en la que los movilizados muestran la debilidad de los gobernantes (de Banzer, en abril, octubre de 2000 y junio de 2001; de Quiroga en enero de 2002; de Sánchez de Lozada, en febrero y octubre de 2003), incitan o “contagian”⁴³⁴ a otros sectores a utilizar la movilización como mecanismo exitoso de demanda (maestros, jubilados, sin tierra, “generación sándwich”, universidades) y afectan los intereses de determinados sectores del bloque gobernante, con el consiguiente desequilibrio de la estructura de poder, lo que dará lugar a acciones de respuesta de los afectados (la llamada “media luna” empresarial-cívico-política del Oriente del país), y luego, entonces, a otra oleada de movilización, generando así un proceso de inestabilidad y turbulencia política que se alimenta de sí misma.

No toda *época revolucionaria* culmina con una revolución, entendida ésta como un cambio por la fuerza del poder del Estado, que tendría que venir precedida, entonces, de una situación revolucionaria o insurreccional. Hay *épocas revolucionarias* que también pueden dar lugar a una restauración por la fuerza política del viejo régimen (golpe de Estado), o a una modificación negociada y pacífica del régimen político mediante la incorporación parcial (reformismo

⁴³² Tilly, Ch. 2000 *Las revoluciones europeas. 1492-1992* (Barcelona: Crítica).

⁴³³ Tarrow 1997 *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política* (Madrid: Alianza Universidad).

⁴³⁴ Oberschall, A. 1993 *Social Movements: ideologies, interests, transaction* (New Brunswick: Publisher).

Crisis estatal y época de revolución

moderado) o sustancial (reformismo radical) de los insurgentes y sus propuestas de cambio en el bloque de poder.

Una *época revolucionaria* es precisamente lo que caracteriza la actual situación política en Bolivia. Desde el año 2000, hay una creciente incorporación de sectores sociales en la deliberación y decisión política (agua, tierra, gas, constituyente) mediante sus organizaciones de base sindical, comunal, vecinal o gremial; hay un continuo debilitamiento de la autoridad gubernamental y fragmentación de la soberanía estatal, y por supuesto hay una ascendente polarización del país en dos bloques sociales portadores de proyectos de economía y estado radicalmente distintos y enfrentados.

En uno de los polos políticos, el núcleo fundamental de la fuerza de acción colectiva con efecto estatal y los que poseen claramente un proyecto de país diferenciado de todo lo que hasta ahora existe, es el movimiento indígena, en su vertiente rural-campesina y obrero-urbana, con lo que el componente étnico-nacional, regional y de clase está claramente delimitado. En conjunto, este polo tiene una propuesta de economía centrada en el mercado interno, tomando como eje la comunidad campesina, la actividad artesanal, familiar y micro-empresarial urbana, en un papel revitalizado del Estado como productor e industrializador y en un protagonismo de los indígenas en la conducción del nuevo Estado.

Por su parte, en el otro polo ordenador del campo político, el sector que posee una clara imagen de lo que debe ser el país en términos de vinculación a los mercados externos, del papel de la inversión extranjera, de subordinación del Estado a los negocios privados y de preservación, o restauración, del viejo orden que los ha encumbrado (igualmente su viabilidad es tema de otro debate), es el empresariado agro-exportador, financiero y de las petroleras, que posee el papel más dinámico, modernizador y ascendente de la actividad económica nacional. Pero, a la vez, se trata de sectores que al tiempo de haber creado un discurso abiertamente racializado están anclados en la zona oriental y sur-oriental del país, lugares donde precisamente no alcanza la irradiación organizativa del polo de los movimientos sociales, a pesar de la existencia de ciertas estructuras de acción colectiva.

Esto significa que la polaridad política tiene tres componentes simultáneos que le dan cuerpo: tiene una base étnico-cultural (indígenas/*q'aras*-gringos), una base clasista (trabajadores/empresarios) y regional (occidente/media luna). En el caso del polo de "izquierdas", la identidad movilizadora es predominante-

Álvaro García Linera

mente étnico-cultural (lo nacional-indígena), en torno a lo cual la identidad propiamente obrera o bien queda disuelta (en un tipo novedoso de obrerismo indígena), o bien complementa secundariamente su liderazgo (COB, fabriles, Cooperativistas). En el caso de la polaridad de “derechas”, la identidad movilizadora y discursiva es de corte regional, de ahí la importancia de los comités cívicos en la articulación de estas fuerzas conservadoras.

Esto está llevando a una disociación entre poderío económico en “Oriente”, y poderío político de los movimientos sociales en “Occidente” y, con ello, a una apertura de las tijeras de la estabilidad, pues los componentes del poder se hallan repartidos en dos zonas distintas, en dos regiones distintas, sin posibilidad inmediata de que una logre desplazar o derrotar a la otra de la posición que ocupa. El poder económico ascendente, pese a sus problemas, se ha desplazado de occidente a oriente (inversión extranjera en hidrocarburos, servicios, agroindustria), pero el poder sociopolítico de movilización se ha reforzado en occidente, dando lugar a una nueva incertidumbre geográfica del poder estatal en los siguientes años. Lo interesante de esto que podríamos llamar la *paradoja de octubre* es que esta separación regional simultáneamente expresa una separación y confrontación étnica y de clases nítidamente diferenciadas: empresarios en oriente (Departamento de Santa Cruz, Beni, Tarija) con poder económico e indígenas y sectores plebeyos de occidente (La Paz, Cochabamba, Potosí, Oruro) con poder político, ambos acechando a un Estado, a una burocracia y a una correlación de fuerzas políticas gubernamentales que territorial, social y culturalmente no expresan óptimamente la nueva configuración económica, geográfica, clasista y política de la sociedad boliviana. Ciertamente hay empresarios, indígenas, mestizos, obreros y campesinos en todo el territorio del país, pero los discursos y las identidades ascendentes y articuladoras de la región tienen estas calidades diferenciadas por procedencia de clase, adscripción étnica y enraizamiento territorial.

En conjunto, el mapa de la correlación de fuerzas sociopolíticas del país muestra un campo político polarizado en extremo, con tendencias hacia salidas de fuerza, tanto golpistas (MNR⁴³⁵) como insurreccionales (CSUTCB/COB), y hacia salidas electorales, tanto de tipo restauradoras del viejo régimen

⁴³⁵ Movimiento Nacionalista Revolucionario, partido político que promovió la revolución de 1952 y que en los años ochenta promovió las reformas liberales guiadas por el llamado Consenso de Washington.

Crisis estatal y época de revolución

(ADN⁴³⁶) como de transformación progresiva del mismo (MAS). En cualquiera de los casos, ninguna de las fuerzas y tendencias de los polos extremos o de las salidas moderadas ha logrado articular a un bloque mayoritario del resto de los componentes, y mucho menos de otros segmentos ciudadanos, que si bien no aparecen como fuerzas organizadas y visibles, son indispensables para producir liderazgo social con capacidad de impacto y poder estatal duradero.

Desde el punto de vista de los movimientos sociales y de sus perspectivas de transformación indígena-plebeya de las estructuras de poder, está claro que ellos están impulsando dos alternativas: un camino de cambios graduales, institucionales por vía electoral, a la cabeza de una candidatura de Evo Morales, y una vía insurreccional de retransformación revolucionaria del Estado. En el primer caso se requeriría articular en torno a Morales, y con un consenso amplio y negociado con los otros líderes y movimientos sociales, sin cuyo apoyo el triunfo de Morales sería imposible, un bloque social electoral, tanto para las elecciones municipales, como para la constituyente y para las generales, adelantadas o en 2007, de la totalidad de estos movimientos con *fuerza política* real, a fin de generar un polo popular e indígena suficientemente fuerte, compacto, unificado; que haga creíble ante el electorado un gobierno con capacidad de mando, con amplio respaldo social y con propuestas de cambio lo suficientemente consistentes como para atraer a aquellos segmentos urbanos, de clase media, populares ascendentes e incluso empresariales vinculados al mercado interno, que por hoy son reacios a aceptar una salida gubernamental de corte indígena y que de hecho, de no contar con su apoyo, inviabilizarán un triunfo electoral y la gobernabilidad de un candidato indígena.

Sin embargo, en cualquiera de ambas vías, que no necesariamente son antagónicas sino que pueden resultar complementarias, el polo indígena-plebeyo debe consolidar una capacidad hegemónica (Gramsci), entendida ésta como liderazgo intelectual y moral sobre las mayorías sociales del país. No habrá triunfo electoral o insurrección victoriosa sin un amplio, paciente trabajo de unificación de los movimientos sociales y una irradiación práctica, ideológica, que materialice un liderazgo político, moral, cultural, organizativo, del polo indígena-popular sobre la mayoría de las capas populares y medias de la sociedad boliviana.

⁴³⁶ Acción Democrática Nacionalista, partido fundado al momento de su caída por el dictador Hugo Banzer y que lo llevo a participar exitosamente en las sucesivas elecciones y acceder a la presidencia de la república en el período 1997-2002.

Álvaro García Linera

La lucha por el poder en Bolivia *

Crisis estatal, renovación de elites y ampliación de derechos

Bolivia está viviendo los momentos de mayor intensidad de la lucha socio-política que hayamos visto, al menos en los últimos cincuenta años y quizás en los últimos cien años. A este escenario de lucha generalizada y ampliada por la reconfiguración del poder económico, del poder político y del poder cultural; a este escenario tan conflictivo se lo puede caracterizar como una época de crisis estatal general. ¿Cuáles son los síntomas de esta crisis estatal?

Crisis del modelo económico

Un elemento estructural que sostiene y ha dado lugar a esta crisis política es la visibilización de los límites del modelo de crecimiento económico aplicado desde hace veinte años. Como sabemos, desde hace dos décadas las elites políticas y económicas del país adoptaron un proyecto de modernización económica, de ampliación del empleo y ascenso social a través de la reducción del papel productivo del Estado, la privatización de las empresas públicas y la apertura de los mercados. Se dijo que con ello el país iba a crecer el 10% anualmente, que iba a mejorar el bienestar social y se iban a crear centenares de miles de fuentes de empleo.

A veinte años de estas reformas, los resultados son literalmente catastróficos en términos de efectos económicos y sociales.

La tasa de crecimiento del producto interno bruto desde la capitalización a la fecha es sorprendentemente modesta: en 1997, 4,9%; en 1998, 5 %; en 1999, 0,4%; en 2000, 2,2%; en 2001, 1,5%; en 2002, 2,7% y en 2003, 2,4%. Esto da un promedio de 2,7 % de crecimiento del PIB en estos 7 años⁴³⁷. Si a ello le restamos la tasa de crecimiento demográfico del 2,2% anual⁴³⁸, en realidad la economía ha crecido en promedio el 0,5% anual en los últimos años. Si comparamos

* En *Horizontes y límites del Estado y el poder* 2005 (La Paz: Muela del Diablo).

⁴³⁷ Muller y Asociados 2004 *Estadísticas socio-económicas* (La Paz).

⁴³⁸ Instituto Nacional de Estadística 2004 Banco de Datos.

Crisis estatal y época de revolución

estas cifras con la oferta que se hizo al momento de la capitalización de un crecimiento del 10% anual, está claro que, desde el punto de vista de las expectativas ofrecidas, el proceso de capitalización es un fracaso económico.

En términos comparativos, entre 1991-2002, en momentos de libre mercado e inversión extranjera, la economía ha crecido en promedio el 3,1% anual, muy lejos del récord histórico de crecimiento promedio anual del 5,6% entre los años 1961-1977⁴³⁹ cuando prevalecía el Estado productor. En los siguientes años, estas cifras pueden ser aun menores, si, como viene sucediendo, estamos asistiendo a una declinación estructural de la inversión extranjera en el país que de 1.026 millones de dólares en 1998 bajo a 832 millones en 2000⁴⁴⁰, cayendo a 160 millones en el año 2003.⁴⁴¹

Si bien en los últimos dos años nuevamente la tasa de crecimiento busca mantenerse más allá del 3,5% y se ha experimentado un notable crecimiento de las exportaciones (2.100 millones de dólares en 2004), éstas se sostienen básicamente en la ampliación de la actividad hidrocarburífera⁴⁴² que, al menos hasta junio de 2005, está en manos de inversionistas extranjeros que externalizan fuera del país el excedente gasífero.

En términos de estrategia de desarrollo, el modelo de privatización-capitalización de las empresas públicas, iniciado desde 1989, tenía por objeto atraer inversión externa capaz de mejorar la productividad empresarial, elevar los ingresos del Estado, ampliar la base moderna de la economía boliviana y generar bienestar social, que es en el fondo la intención de cualquier política pública.

Sin embargo, en la última década y media la informalidad ha crecido del 58% al 68%⁴⁴³, en tanto que siete de cada diez empleos son de baja calidad, con tecnología artesanal y relaciones semi-asalariadas. En el mundo asalariado, por su parte, según el propio ministro Grebe, ocho de cada diez empleos son precarios, insatisfactorios y mal remunerados⁴⁴⁴. Se puede decir que en las últimas décadas Bolivia ha tenido una involución económica por el creciente proceso de *desasalarimiento* de su actividad laboral. Todo esto está dando lugar a una

⁴³⁹ PNUD 2004 *Informe nacional de desarrollo humano 2004* (La Paz).

⁴⁴⁰ INE 2003 *Inversión extranjera directa 1996-2002* (La Paz).

⁴⁴¹ Datos entregados por el Banco Central de Bolivia, *La Razón*, 28 de abril del 2004.

⁴⁴² *Nueva Economía*, 27 de febrero del 2005.

⁴⁴³ Arce, Carlos 1999 "Empleo y relaciones laborales" en *Bolivia hacia el siglo XXI* (La Paz: CIDES-UMSA/CNR/ANC/CEDLA/CEB/PNUD).

⁴⁴⁴ *La Prensa*, 7 de julio del 2004.

Álvaro García Linera

intensificación de la dualización catastrófica de la estructura económica del país. Por una parte, las empresas grandes y con relaciones de trabajo asalariado sólo emplean al 7% de la población trabajadora; las pequeñas y medianas empresas lo hacen con el 10%, en tanto que la empresa familiar, bajo relaciones de trabajo tradicionales, emplea a poco más del 80% de la población ocupada. De manera inversa, son las grandes empresas quienes generan el 65% del PIB, en tanto que la economía familiar produce apenas el 25% del PNB⁴⁴⁵.

En lo que se refiere a la tasa de desempleo, se ha incrementado del 3% en 1994 al 8,5 en 2001⁴⁴⁶ y, según el CEDLA, en 2003 se hubiera llegado al 13%⁴⁴⁷, lo que representa un índice de desempleo mayor al de los momentos de la crisis económica y el quiebre productivo de los años ochenta. Y en lo que respecta al aporte de las capitalizadas al empleo, estas empresas emplean hoy a cerca de 6.100 personas⁴⁴⁸, 5000 trabajadores menos que las 11.100 personas que trabajaban antes de la capitalización⁴⁴⁹. Por su parte, los ingresos laborales, pese a los supuestos 2.700 millones de inversión de las capitalizadas y a los 7.300 millones de toda la IED⁴⁵⁰, el ingreso promedio del boliviano en 2002 se mueve en los 1.100 dólares, similar al de 1982 y menor al de 1978 cuando se llegó a los 1.250 dólares⁴⁵¹. En lo que se refiere a los últimos años, los cálculos del INE muestran una contracción del 13,5% del promedio de los ingresos de los bolivianos entre 1999 y 2003⁴⁵².

En términos de la reducción de las desigualdades sociales, las reformas y el modelo de desarrollo privatizador han tenido un efecto contrario. Según el Banco Mundial, en Bolivia, en la última década se ha dado un constante crecimiento de la diferencia entre los ingresos del sector más rico respecto al sector más pobre. Mientras que en América Latina el promedio de la diferencia es de 1 a 30, en Bolivia es de 1 a 90, y en el campo llega a 1 a 170 con lo que somos uno de los países con mayor desigualdad del mundo⁴⁵³.

⁴⁴⁵ *Nueva Economía*, 28 de diciembre del 2004.

⁴⁴⁶ PNUD 2004 *Informe nacional de desarrollo Humano* (La Paz: PNUD).

⁴⁴⁷ Huanca, Efraín 2004 *Economía boliviana: evaluación del 2003 y perspectivas para el 2004* (La Paz: CEDLA).

⁴⁴⁸ Mercado, Alejandro 2002 *Capitalización y empleo* (La Paz: Fundación Milenio).

⁴⁴⁹ Valdivia, José 1998 "La capitalización" en AA. VV. *Las reformas estructurales en Bolivia* (La Paz: Fundación Milenio).

⁴⁵⁰ Pacheco, N., *op. cit.*

⁴⁵¹ PNUD, *op. cit.*

⁴⁵² INE 2004 *Síntesis estadística de Bolivia* (La Paz: INE).

⁴⁵³ Ferranti, Perri, Ferreira y Walton (2004) *Desigualdades en América Latina y el Caribe. ¿Ruptura con la historia?* (Banco Mundial).

Crisis estatal y época de revolución

Ciertamente que una parte de estas cifras deplorables del desempeño de la economía nacional tiene condicionantes estructurales que vienen desde décadas e incluso siglos atrás, con lo que en rigor no se puede decir que sólo es la capitalización o la inversión externa la generadora de estos desequilibrios. Sin embargo, lo que sí ha hecho el modelo de desarrollo sostenido en la inversión externa como locomotora productiva de la economía es:

Primero. Incrementar drásticamente las desigualdades económicas, elevar la tasa de concentración de la riqueza, aumentar la precariedad y el desempleo, limitar las tasas de crecimiento y reducir la redistribución de la riqueza.

Segundo. Inaugurar un tipo de desarrollo económico basado en el exclusivo protagonismo productivo de la inversión externa, siendo que esta inversión, en sociedades como las nuestras, es de tipo de enclave, de alta inversión tecnológica, bajo empleo, nula diversificación productiva y de externalización (exportación) de las ganancias.

Tercero. Romper los lazos de articulación entre, por una parte, la economía moderna y globalizada del país, que abarca a cerca del 28% de la población boliviana⁴⁵⁴, y, por otra, la economía campesina tradicional compuesta por 550.000 unidades familiares (35% de la población boliviana) y la economía mercantil familiar-artesanal de los 700.000 establecimientos urbanos que agrupa al 37% de la población nacional⁴⁵⁵. La inversión productiva del empresariado desde hace décadas es endémica (no más del 2% sobre el PIB entre 1985 y 2002⁴⁵⁶), y, a lo largo de la historia, ha sido el Estado, pese a su corrupción y a veces ineficiencia, el que ha ayudado a expandir las relaciones industriales en Bolivia, articular mercados regionales, generar empleos, abastecer de servicios subvencionados a poblaciones sumergidas en la pobreza extrema, creando ciertos espacios de fusionamiento entre lo moderno y lo tradicional, además de habilitar meca-

⁴⁵⁴ Laserna, R. 2004 *Bolivia: la crisis de octubre y el fracaso del Chenko* (La Paz: Muller y Asociados).

⁴⁵⁵ Grebe, Horst 2002 "El crecimiento y la exclusión", en AA. VV. *La fuerza de las ideas* (La Paz: Foro del Desarrollo).

⁴⁵⁶ INE, citado en *La Prensa*, 29 de agosto del 2004. La fundación Milenio cita un informe del Ministerio de Hacienda en el que se establece que en el año 2001 la Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF) privado nacional fue de 89 millones de dólares, en tanto que el 2002 hubiera sido de 84 millones. (2003) Informe Milenio sobre la Economía en el año 2002 (La Paz: Milenio)

Álvaro García Linera

nismos de movilidad y ascenso social imprescindibles para cualquier proceso de nacionalización de poblaciones cultural y únicamente tan diferentes como las que habitan Bolivia.

Hoy, con la capitalización y sus reglas de rentabilidad y exportación del excedente económico, tenemos un diminuto tren bala vinculado a los procesos de globalización, y unos gigantescos carretones anclados en tecnologías del siglo XVII y XIX, abandonados a una suerte de degradación interna sin puentes ni eslabones que permitan palanquear hacia la modernidad económica a estos mayoritarios sectores productivos. El que la economía familiar sea la base material de los movilizadores de los últimos años (campesinos, vecinos, sin tierra, cocaleros, gremiales, indígenas urbanos, cooperativistas, colonizadores), precisamente se sostiene sobre esta disociación entre las esferas económicas de la sociedad boliviana.

Crisis de los componentes de corta duración del Estado

Sobre este escenario de crisis del modelo de crecimiento económico manifiesta desde 1999, ha surgido un proceso de deslegitimación social del sistema político, de fractura de las creencias conservadoras, de frustración entre las ofertas de modernidad y los resultados reales alcanzados y, con ello, de disponibilidad social a nuevas creencias y fidelidades, de articulación de nuevas demandas en torno a lo que Hegel definió como el sistema de necesidades (defensa de las condiciones de reproducción básicas: agua, tierra, servicios, energéticos), y el sistema de libertades (Asamblea Constituyente, autogobierno indígena, democracia comunitaria, etcétera).

Un elemento que ayuda a caracterizar el escenario sociopolítico actual es el resquebrajamiento de los componentes que tiene todo Estado. Es sabido que todo estado tiene tres grandes bloques constitutivos: es una correlación de fuerzas, es un sistema de instituciones y es un sistema de creencias. Veamos que ha sucedido en cada uno de estos componentes estatales.

La correlación de fuerzas que caracterizó al Estado boliviano entre los años 1985 y 2000 se basó sobre una concentración, una monopolización del capital burocrático administrativo, de la capacidad de decisión; en un bloque de poder conformado por sectores exportadores –básicamente minería y agroindustria–, parte de la banca, la inversión extranjera directa y organismos de apoyo multi-

Crisis estatal y época de revolución

lateral que son ahora encargados del 85% de nuestra deuda externa. Éste fue el bloque de poder que se estructuró en los años ochenta y noventa, que desplazó a los bloques organizados corporativamente como los sindicatos de la COB, lo que le dio relativa estabilidad política en los años noventa.

Esa correlación de fuerzas hoy en día se ha modificado de manera drástica. Otros sectores, otros grupos sociales que anteriormente no tenían fuerza de presión ni poder político, ahora tienen la capacidad de cambiar leyes, tienen la capacidad de cambiar presidentes, tienen capacidad de modificar políticas públicas. Es decir, el bloque de poder que caracterizó a la sociedad boliviana durante veinteaños se ha resquebrajado, y otros sectores externos a ese bloque de poder están comenzando a construir desde hace cuatro años fuerzas de presión capaces de modificar la manera de influir en políticas públicas. Por lo tanto, el primer componente del Estado neoliberal patrimonial está debilitado.

Otro elemento de la crisis estatal es el tema de las instituciones. La institucionalidad democrática de 1985 a 2000 se caracterizó por la división de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial; la subordinación fáctica del judicial al ejecutivo, el soborno fáctico del ejecutivo al legislativo y la llamada gobernabilidad pactada, que consistía en la formación de bloques mayoritarios en el parlamento que le daban estabilidad al Presidente. A cambio, el Presidente redistribuía porcentualmente a la votación que tenían los partidos de gobierno en el parlamento, la estructura de cargos de la administración pública de alrededor de 18.000 a 19.000 fuentes de trabajo, que quedaba loteada por colores y siglas partidarias. Esto caracterizó la llamada gobernabilidad pactada.

Este sistema de estabilidad institucional hoy en día está en crisis. En primer lugar tenemos un ejecutivo sin mayoritario apoyo legislativo; un Presidente que no tiene partidos al menos visibles en el ámbito parlamentario. Por otra parte, hay en Bolivia una abierta dualización del sistema político; por una parte se toman decisiones en el parlamento y por otra parte se toman decisiones a través de las movilizaciones de sindicatos, de comunidades, comités cívicos y movimientos sociales.

Esto significa que Bolivia tiene en este momento un campo político dualizado. Se hace política vía partidos, cada vez menos, y se hace política extrapartidariamente desde las corporaciones empresariales, los comités cívicos, los sindicatos, los gremios, las juntas de vecinos, que también son estructuras de acción política. Y tanto es así que lo que ahora discute el Parlamento no es una agenda propia: la agenda de Asamblea Constituyente, de Referéndum, de

Álvaro García Linera

Nueva Ley de Hidrocarburos es una agenda impuesta desde la calle, lo que nos habla de esta dualidad de instituciones políticas en el país, que resquebraja el modelo de democracia pactada o de gobernabilidad pactada de los últimos veinte años que le dieron estabilidad al Estado boliviano.

Por último, el sistema de creencias. Todo Estado es una maquinaria de creencias, la política es ante todo la administración de las creencias dominantes de una sociedad. Las creencias dominantes, las ideas fuerza que caracterizaron al país durante dieciocho años fueron modernidad, libre mercado, inversión externa, democracia liberal, como sinónimos de progreso y de horizonte modernizante de la sociedad. Estas ideas que seducían a la sociedad, en todos sus estratos, se han debilitado, no convocan entusiasmos colectivos y surgen nuevas ideas fuerza: nacionalización, descentralización, autonomía, gobierno indígena, autogobierno indígena, etcétera. Son nuevas ideas fuerza con creciente apoyo social que están imponiéndose en el escenario político y que han debilitado las ideas fuerza que caracterizaron al neoliberalismo los últimos dieciocho años.

Por lo tanto, crisis de las instituciones estatales, crisis de las ideas fuerza del estado, crisis de la correlación de fuerzas: crisis de Estado. Esto significa que la actual crisis política no es un problema meramente de gobernabilidad; no estamos frente a un problema de ineficiencia administrativa del Presidente, que por cierto la tiene. La crisis actual rebasa la mala gestión presidencial y la mediocridad parlamentaria. La estructura institucional del Estado está en crisis: su correlación de fuerzas, sus creencias y su institucionalidad están siendo cuestionadas, debilitadas, resquebrajadas o reblandecidas por este tipo de fenómenos sociales y políticos.

Crisis de los componentes de larga duración del Estado

Por si fuera poco, no solamente estamos asistiendo a una crisis del Estado “neoliberal-patrimonial”, lo que podría ser resuelto mediante un orden posneoliberal, moderado o radical, sino que también estamos asistiendo simultáneamente a una crisis del conjunto de instituciones y de estructuras de larga duración del Estado republicano boliviano. Es sabido que todo Estado tiene dos niveles de instituciones y componentes: uno, de larga duración que dura décadas y siglos, se trata de los componentes estructurales del orden estatal. Por otra parte, están los componentes de “corta duración” que se modifican cada dos

Crisis estatal y época de revolución

o tres décadas (Estado nacionalista, Estado neoliberal, etc.). Resulta que ahora no sólo están en cuestión los componentes de corta duración del Estado (su carácter neoliberal), sino también varios de sus componentes de “larga duración” de su cualidad republicana. Por lo tanto, estamos asistiendo a una doble crisis o a un montamiento de dos crisis; una crisis del Estado en sus componentes de corta duración neoliberales y una crisis del Estado en sus componentes de larga duración republicana. Veamos esto.

La fisura colonial del Estado

Hay dos temas centrales en la lucha política que están cuestionando la estructura republicana del Estado. El primero tiene que ver con la presencia de los actores sociopolíticos más influyentes del país que son básicamente los indígenas. Hoy en día, los movimientos sociales más impactantes son o están dirigidos por indios, son fuerzas indígenas. No había pasado eso desde 1899, en época de la guerra federal. Los indios nunca habían tenido tanta posibilidad de presión y de contra-poder como lo estamos viendo hoy. No cabe duda de que son los sujetos fundamentales de la actual interpelación al Estado.

Es sabido que la república boliviana se fundó dejando en pie los mecanismos coloniales que consagraban prestigio, propiedad y poder en función del color de piel, del apellido, el idioma y el linaje. La primera constitución republicana claramente escindió la “bolivianidad” asignada a todos los que habían nacido bajo la jurisdicción territorial de la nueva república, de los “ciudadanos”, que debían saber leer y escribir el idioma dominante (castellano) y carecer de vínculos de servidumbre, con lo que de inicio los indios carecían de ciudadanía.

Las distintas formas estatales que se produjeron hasta 1952 no modificaron sustancialmente este *apartheid* político. El Estado caudillista (1825-1880) y el régimen de la llamada democracia “censitaria” (1880-1952), tanto en su momento conservador como liberal modificaron muchas veces la constitución política del Estado; sin embargo, la exclusión político-cultural se mantuvo en la normatividad del Estado como en la práctica cotidiana de las personas. De hecho, se puede decir que en todo este período la exclusión étnica se convertirá en el eje articulador de la cohesión estatal.

Los procesos de democratización y homogenización cultural iniciados a raíz de la Revolución de 1952, en parte transformaron el régimen de exclusión étnica

Álvaro García Linera

y cultural del Estado oligárquico. El voto universal amplió el derecho de ciudadanía política liberal a millones de indígenas; pero lo hizo imponiendo un único molde organizacional de derechos políticos, el liberal, en medio de una sociedad portadora de otros sistemas tradicionales de organización política y de selección de autoridades que ahora quedaban borradas como mecanismos eficientes en el ejercicio de prerrogativas políticas. Igualmente, la educación fiscal y gratuita permitió que indígenas que constituían la abrumadora mayoría de los “analfabetos” marginados de un conjunto de saberes estatales, ahora pudieran estar más cerca de ellos. Sin embargo, la adquisición de conocimientos culturales legítimos quedó constreñida a la adquisición obligatoria de un idioma ajeno, el castellano y de unas pautas culturales producidas y monopolizadas por las colectividades mestizo-urbanas con lo que nuevamente los mecanismos de exclusión étnica se activaban, sólo que ahora de manera renovada y eufemistizada. De esta manera, entre 1952 y 1976, entre el 60 al 65% de la población boliviana que tenía como lengua materna un idioma indígena sólo pudo ejercer sus derechos de ciudadanía por medio de un idioma extranjero ya que la educación oficial, el sistema universitario, el vínculo con la administración pública, los servicios, etc., sólo podían realizarse por medio del castellano y no así empleando el idioma quechua o aimara.

Los 178 años de vida republicana, pese a sus evidentes avances en cuanto a igualación de derechos individuales, ha reetnificado la dominación, dando lugar a un campo de competencias por la adquisición de la etnicidad legítima (el capital étnico) a fin de contribuir a los procesos de ascenso y enclasmiento social.

En Bolivia es por demás evidente que pese a los profundos procesos de mestizaje cultural, aún no se ha podido construir la realidad de una comunidad nacional. En el país existen por lo menos treinta idiomas y/o dialectos regionales, existen dos idiomas que son la lengua materna del 37% de la población (el aimara y el quechua), en tanto que cerca del 62% se identifica con algún pueblo originario⁴⁵⁷. Y, en la medida en que cada idioma es toda una concepción del mundo, esta diversidad lingüística es también una diversidad cultural y simbólica. Si a ello sumamos que existen identidades culturales y nacionales más antiguas que la república, y que incluso hoy reclaman la soberanía política sobre territorios usurpados (el caso de la identidad aimara) es por demás claro que

⁴⁵⁷ INE 2002 *Censo nacional de población y vivienda 2001* (La Paz).

Crisis estatal y época de revolución

Bolivia es en rigor una coexistencia de varias nacionalidades y culturas regionales superpuestas o moderadamente articuladas. Sin embargo, y pese a ello, el Estado es monoétnico y monocultural en términos de la identidad cultural boliviana castellano hablante. Esto supone que sólo a través del idioma español la gente obtiene prerrogativas y posibilidades de ascenso en las diferentes estructuras de poder tanto económico, político, judicial, militar como cultural del país.

En Bolivia, hay por lo menos medio centenar de comunidades histórico-culturales con distintas características y posiciones jerárquicas. La mayoría de estas comunidades culturales se hallan en el la zona oriental del país y demográficamente abarcan desde unas decenas de familias, hasta cerca de cien mil personas. En la zona occidental del país, se hallan concentradas las dos más grandes comunidades histórico-culturales indígenas, los quechua y aimarahablantes que suman más de cinco millones de personas. Los aimaras alcanzan a un poco más de dos millones y medio de personas, y tienen todos los componentes de una unidad étnica altamente cohesionada y politizada. A diferencia del resto de las identidades indígenas, la aimara ha creado desde décadas atrás elites culturales capaces de dar pie a estructuras discursivas con la fuerza de reinventar una historia autónoma que ancla en el pasado la búsqueda de un porvenir autónomo, un sistema de movilización sindical de masas en torno a estas creencias políticas y, recientemente, un liderazgo con capacidad de dar cuerpo político visible a la etnicidad. Por último, tenemos la identidad cultural boliviana dominante, resultante de los 180 años de vida republicana, y que si bien inicialmente ha surgido como artificio político desde el Estado, hoy tiene un conjunto de hitos históricos culturales y populares que la hacen consistente y predominantemente urbana.

Sin embargo, la mayoría de estas referencias cognitivas de las comunidades culturales nunca han sido integradas a la conformación del mundo simbólico y organizativo estatal legítimo, debido a que las estructuras de poder social se hallan bajo monopolio predominante de la identidad étnica boliviana; por lo que se puede decir que el Estado republicano es un Estado de tipo monoétnico o monocultural y, en tal sentido, excluyente y racista.

Esto ha llevado a lo largo de toda la república a varios ciclos de movilización indígena, tanto por reivindicaciones parciales, como por el poder político, ya sea bajo la forma de co-gobierno o de autogobierno.

Precisamente a partir de 2000, estamos viviendo nuevamente un ciclo de insurgencia indígena dirigida a disputar la conducción estatal y la hegemonía político-cultural de la sociedad.

Álvaro García Linera

Este nuevo ciclo de movilización indígena tiene su antecedente en los años setenta, con la emergencia del movimiento indianista-katarista en los ámbitos intelectuales y sindicales agrarios. Primero será el movimiento indígena de tierras altas el que cobrará presencia y discurso interpelador en los años setenta y ochenta; luego serán los indígenas de tierras bajas los que visibilizarán los mecanismos de exclusión de decenas de pueblos olvidados por la sociedad como sujetos de derecho, y a mediados de la década del noventa los cocaleros se convertirán en los sectores que mayor esfuerzo realizarán para resistir las políticas de erradicación de la hoja de coca.

Pero será abril de 2000 el que marcará un punto de inflexión en las demandas y la capacidad de movilización sociopolítica de los movimientos sociales, especialmente indígenas. Articuladas en torno a la conquista de necesidades básicas y a la defensa de recursos territoriales de gestión comunitaria, pequeñas estructuras organizativas locales de tipo territorial y no territorial basadas en el lugar de residencia, en el control de bienes como la tierra y el agua, en la actividad laboral, gremial o simplemente de amistad, han ido creando redes de movilización colectiva que han puesto en pie a nuevos movimientos sociales; como el caso de la Coordinadora del Agua y la Vida, los Sin Tierra, el CONAMAQ y la revitalización de organizaciones antiguas, como la CSUTCB, la Confederación de Colonizadores, los productores cocaleros, la CPESC, las Juntas de Vecinos, etcétera.

La importancia histórica de estos movimientos sociales radica en su capacidad para reconstruir el tejido social y su autonomía frente al Estado, además de redefinir radicalmente lo que van a entender por acción política y democracia.

En términos exclusivamente organizacionales, la virtud de estos movimientos sociales se asienta en que han creado mecanismos de participación, de adhesión y filiación colectiva a escala regional flexibles y fundamentalmente territorializados que se adecuan a la nueva conformación híbrida y porosa de las clases e identidades sociales en Bolivia.

Mientras el antiguo movimiento obrero tenía como centro la cohesión sindical por centro de trabajo en torno al cual se articulaban otras formas organizativas de tipo gremial urbanas, los actuales movimientos sociales tienen como núcleo organizativo (CSUTCB, CIDOB, Colonizadores, CPESC, Regantes, Cocaleros) a la comunidad indígena-campesina en el área rural, y a las comunidades vecinales en el área urbana alrededor de la cual se aglutinan asociaciones

Crisis estatal y época de revolución

laborales (maestros rurales), gremiales (transportistas, comerciantes de la zona), estudiantiles, etcétera. Aquí, la comunidad indígena urbana y rural, campesina y vecinal, que es lo mismo que decir las células de una otra sociedad, son la columna vertebral articuladora de otros grupos sociales y otros modos locales de unificación influenciados por la actividad económica y cultural campesino-indígena y hacen de esta acción colectiva más que un movimiento social, un movimiento societal⁴⁵⁸, pues se trata de una sociedad entera que se traslada en el tiempo.

La posibilidad de que un abanico tan plural de organizaciones y sujetos sociales pueda movilizarse, ha de garantizarse mediante la selectividad de fines que permite concentrar en torno a algunas demandas específicas voluntades colectivas diversas. Esto ha requerido descentrar las reivindicaciones de la problemática del salario directo, propio del antiguo movimiento obrero, para ubicarlo en términos de una política de necesidades vitales (agua, territorio, servicios y recursos públicos, hidrocarburos, educación) que involucra a los múltiples segmentos poblacionales subalternos y que, dependiendo de la ubicación social de los sujetos, puede ser leído como el componente del salario indirecto (para los asalariados), como el soporte material de la reproducción (vecinos, jóvenes) o la condensación del legado histórico cultural de la identidad (los indígenas).

Pero los actuales movimientos sociales indígenas no son sólo actividades de protesta y reivindicación; por sobre todo son estructuras de acción política. Son políticos porque los sujetos de interpelación de la demanda que desencadenan las movilizaciones son en primer término el Estado (abolición de la Ley de Aguas, anulación de contratos de privatización, suspensión a la erradicación forzosa, territorialidad indígena, Asamblea Constituyente, nacionalización de los hidrocarburos), y el sistema de instituciones supraestatales de definición de las políticas públicas (FMI, BM, inversión extranjera). Incluso, la propia afirmación de una política de la identidad indígena (de tierras altas y de tierras bajas) se la hace frente al sistema institucional estatal que en toda la vida republicana ha racializado la dominación y la exclusión de los indígenas.

Por otro lado, entre los múltiples movimientos hay los que tienen una orientación de poder. En la medida en que las empresas de movilización de los últimos

⁴⁵⁸ Tapia, Luis 2002 *La condición multisocietal. Multiculturalidad, pluralismo, modernidad* (La Paz: Muela del Diablo/CIDES-UMSA).

Álvaro García Linera

años ha estado dirigida a visibilizar agravios estructurales de exclusión política y de injusta distribución de la riqueza, los movimientos sociales han retomado las tradicionales palestras locales de deliberación, gestión y control (asambleas, cabildos), proyectándolas regionalmente como sistemas no institucionales de participación y control público que han paralizado, y en algunos casos disuelto intermitentemente, el armazón institucional del Estado en varias regiones del país (Altiplano Norte, Chapare, Ciudad de Cochabamba), dando lugar a la coexistencia de dos campos políticos con competencias normativas, algunas veces mestizas y otras confrontadas. Paralelamente, en torno a estas experiencias de ejecución práctica de derechos, los movimientos sociales han comenzado a proyectar a escala general del país estas experiencias exitosas de deliberación y gestión de derechos mediante la formulación de un diseño razonable de “dirección de la sociedad”⁴⁵⁹ que al tiempo de demoler el fatalismo histórico con el que el proyecto neoliberal se legitimó en los últimos veinte años ha diseñado un modelo alternativo de reforma estatal y económica que no sólo se plantea transformar el orden de cosas existente en las últimas décadas, sino que además se propone desmontar las estructuras de colonialidad vigentes en toda la historia republicana.

Se puede decir, por tanto, que los movimientos sociales y societales han transformado varios aspectos del campo político, modificando el espacio legítimo de donde ir a producir política, rediseñando la condición socioeconómica y étnica de los actores políticos, innovando nuevas técnicas sociales para hacer política, además de mutar los fines y sentidos de la política en sus características no sólo neoliberales, sino fundamentalmente republicanas, planteándose transformar el actual Estado monocultural por un Estado y una institucionalidad política multinacional.

La fisura espacial del Estado

El segundo eje de fractura estructural del Estado es el que tiene que ver con el traslamiento de los ejes decisionales económico-políticos del Estado, de una región (norte-occidental) a otra región (oriental).

⁴⁵⁹ Arrighi, G.; Hopkins, T. K. y Wallerstein, I. 1999 *Movimientos antisistémicos* (España: AKAL).

Crisis estatal y época de revolución

A decir de Zavaleta, el territorio es lo profundo de los pueblos: “sólo la sangre es tan importante como el territorio”, y más aún si, como nos sucede a los bolivianos, nuestro momento agrícola constitutivo y el nacimiento de la República fueron decididos por la lógica del espacio antes que por la lógica de la sociedad. Esto significa que, a diferencia de aquellas sociedades cuya ansiedad colectiva de cohesión ha dado lugar a la producción del territorio, acá somos hijos del espacio, sin el cual no seríamos lo que somos en verdad.

Fue también éste quien distinguió entre territorios inherentes y aledaños. Los primeros son los que definen el destino y carácter de una nación, en tanto que los otros sólo complementan esa vida central, y la formación estatal de los estados se dará precisamente por su capacidad de validar territorialmente esos espacios. Se puede decir, por tanto, que la densidad de una nación o la manera en cómo se mira y define sus fines, se mide por la forma de interiorizar socialmente el espacio como base material de su realización colectiva.

Por eso, cuando acontece una crisis de Estado como la que actualmente atravesamos en Bolivia, ésta es también un tensionamiento estructural del modo en que la sociedad recepciona su territorialidad y del modo en que se piensa como comunidad política moderna, esto es, como nación.

Es sabido que el Estado no acontece con la misma intensidad en todas partes; él también tiene zonas esenciales y complementarias. En el primer caso se trata de los ejes político-geográficos de la articulación soberana del Estado, en tanto que en el segundo hablamos de las áreas de irradiación de esa soberanía. Estos ejes político-geográficos no son fijos ni perpetuos, se modifican según los desplazamientos espaciales de los núcleos articuladores de la economía y de los centros de emisión de reforma político-cultural de los países. Así, por ejemplo, el desplazamiento de la sede de gobierno de Sucre a La Paz a fines del siglo XIX significó el desplazamiento del eje político-cultural del Estado de Sucre-Potosí, con su economía de la plata y su intelectualidad jurídica, al eje La Paz-Oruro-Cochabamba, con la nueva minería del estaño, la producción manufacturera, los indios aimaras como sujeto político y los letrados liberales que buscaban imaginar la patria más allá de los cuerpos legales.

Hoy, estamos nuevamente asistiendo a un cuestionamiento de la centralidad geográfica del poder, que no significa necesariamente el cambio de la sede de gobierno, sino un diferendo en torno a qué dinamismo económico espacial se estructurará el bloque de poder y la concepción del mundo estatalmente irradiada. Santa Cruz con su vitalidad agroindustrial globalizada, y Tarija con su

Álvaro García Linera

reservas gasíferas, apuntan hacia una probable conversión en el núcleo movilizador de la economía nacional en las siguientes décadas; en tanto que Oruro, con su economía minera en repliegue y La Paz que no logra instaurar un nuevo patrón tecnológico adecuado a los nuevos requerimientos productivos de la economía mundial, habilitan un posible traslado de la centralidad económica del Estado de occidente a oriente.

Sin embargo, la constitución de los ejes político-espaciales del Estado no depende sólo del poderío económico de las geografías locales, pues el Estado no es una empresa cuyos pivotes se diriman por la rentabilidad económica que proporcionan al todo. Con Weber sabemos que el Estado es una correlación de fuerzas políticas connotada portadora de legitimidad y hegemonía, es decir, es una relación política de dominación legítima que habilita una comunidad política ilusoria entre gobernantes y gobernados. El liderazgo económico puede ayudar y de hecho, a la larga, da el soporte material de la legitimidad de la dominación política. Pero el poderío económico no es inmediatamente poderío político-cultural, y puede darse el caso de que los desplazamientos espaciales del poder queden truncos por ausencia de reforma moral e intelectual de la elite económicamente ascendente. De igual manera, puede darse la posibilidad de una hegemonía política sobre la base de una economía estancada o decadente, aunque esta hegemonía sólo será duradera si al final le acompaña una reforma y vitalidad económica.

De hecho, ésta pareciera caracterizar la actual situación de hegemonías mutiladas que presenta la actual polarización regional-clasista y étnica del país. Por una parte, una economía empresarial de “occidente” estancada y con un empresariado que ha abdicado a cualquier liderazgo político, en medio de un liderazgo político-cultural plebeyo-indígena, aunque sostenido sobre una economía tradicional urbano-campesina en crisis. Por su parte, un liderazgo económico moderno de “oriente”, pero con una capacidad política limitada regionalmente, sin que haya muchas posibilidades de que la irradiación geográfica y clasista de uno de los polos pueda ampliarse al ámbito de la especialidad articulada por el otro polo. Claro, es muy difícil que el discurso liberal y de libre empresa que enarbolan las elites empresariales cruceñas captive a una plebe andina que durante diez años le apostó a esa forma de modernidad, obteniendo únicamente una contracción de sus ingresos y sus expectativas de movilidad social. Un discurso autonomista que no venga aparejado a un tipo de post-neoliberalismo carece de posibilidades de seducir y por tanto de ser hegemónico en “occidente”.

Crisis estatal y época de revolución

Pero a su vez, el neoestatismo popular y en particular el liderazgo indígena, difícilmente habrán de cautivar a una clase media y a un empresariado ascendentes mediante el libre mercado y que, en occidente y oriente, secularmente han sido educados en la subalternidad servil de los indios.

Sin embargo, hay en todo esto una doble paradoja. Por una parte, el bloque social que se levanta y reivindica la pujanza de una economía moderna tiene una lectura de la territorialidad estatal no moderna, de tipo señorial, por lo que carecen de fuerza cultural y simbólica para alzarse con un liderazgo nacional, en tanto que quienes se erigen sobre la precariedad de una economía tradicional, urbano-campesina, si leen el espacio nacionalmente, aunque carecen del sustrato material para liderar la economía pues no se construyen estados modernos desde la pequeña economía doméstico-familiar.

Y es que el empresariado en todos los momentos, y en todas las regiones y pese a todos sus modernismos técnicos, nunca ha dejado de imaginar de manera patrimonial el poder y el territorio; en el primer caso, como privilegio de abo-lengo, y en el segundo como prolongación de la lógica señorial de la hacienda. Independientemente de la globalización de sus actividades económicas y de sus estilos de vida, el empresariado cruceño lee el espacio regionalmente y ha abdicado de una lectura socialmente incorporada del territorio nacional. Por eso puede imaginar, en momentos extremos, a fin de garantizar un blindaje espacial a sus intereses, con una disociación de la unidad territorial, pues la territorialidad estatal no se le presenta como una espacialidad inherente a su destino, sino tan sólo como una contingencia a la esencialidad de la hacienda. En ese sentido, la visión del vínculo espacial del Estado es pre-moderna, señorial, similar a la de las elites andinas del siglo XIX, a las que, a decir de Zavaleta, les importaba más el estado de la estatua de la Virgen de Copacabana que la mutilación del litoral.

En cambio, para el movimiento indígena-plebeyo, la lógica nacional del espacio estatal está incorporada en su horizonte intelectual; es el legado de una lógica agrícola de “múltiples pisos ecológicos”. Por eso es que los indios se imaginan el poder no sólo allí donde son mayoría indígena, sino en todo el país (mediante la victoria electoral en la versión moderada, vía la Asamblea Constituyente o mediante la instauración del *Qullasuyu*, en la versión radical), pues el espacio de sus pretensiones llega hasta donde llega el Estado, e incluso a veces más allá, como en el caso aimara. Se trata entonces de una incorporación moderna de la geografía estatal, aunque, claro está, el sustento técnico-económico de este ímpetu nacionalizador puede ser considerado “pre-moderno”.

Álvaro García Linera

Estos límites y tensiones de la lucha por el poder, en la actualidad están teniendo un correlato territorial a través del debate por un Estado autonómico.

Descentralización política administrativa y autonomía

En Bolivia, la lucha o la demanda por autonomía y/o federalismo se remonta hasta los debates de los años sesenta del siglo XIX en torno a las diversas propuestas de federalismo. Estas discusiones vuelven a ser retomadas en 1899 cuando las elites paceñas, económicamente en ascenso, política y culturalmente con mayor capacidad discursiva y con apoyo de sectores sociales más activos (los indios aimaras y los artesanos), habían reconfigurado un escenario de fuerzas políticas y buscaron bajo la bandera del federalismo trasladar la sede de gobierno de Sucre a La Paz. Esta traslación de la sede de gobierno de Sucre a La Paz con las banderas de la lucha por el federalismo en verdad significó el traslado del eje económico Potosí-Sucre vinculado a la minería de la plata y la hegemonía cultural de grupos intelectuales vinculados al ámbito judicial, hacia la economía del norte vinculada a la minería del estaño, que comienza a desplazar a la minería de la plata, a las manufacturas en Cochabamba, Oruro y La Paz y, a una presencia más activa de una intelectualidad liberal urbanizada, no estrictamente ligada al aparato burocrático estatal como era en Sucre. Esto significa que el desplazamiento de la sede de gobierno de Sucre a La Paz es un desplazamiento del eje económico y del eje político cultural del sur hacia el norte.

Este tema de lo federal y lo autonómico vuelve a renacer intelectualmente en Santa Cruz a principios de siglo con el Manifiesto de la Sociedad Geográfica, que le critica al Estado el abandono de las regiones del oriente y plantea un modelo de desarrollo económico integral y un modelo de desarrollo político con una fuerte presencia autonómica de auto-gobiernos regionales. El tema de los gobiernos regionales vuelve a renacer en 1957, cuando se debate el tema de las regalías del petróleo y, después de múltiples incidentes y enfrentamientos, se distribuye departamentalmente un porcentaje de las regalías petroleras que dura hasta hoy.

El tema de la autonomía de la descentralización se hará nuevamente presente de mano de los comités cívicos cuando se retoma la democracia en los años 1982 y 1984. En ese momento no sólo será Santa Cruz quien demande descentralización, sino también otros departamentos como Cochabamba, Sucre y Potosí.

Crisis estatal y época de revolución

Este ascenso de la demanda de la descentralización departamental quedará neutralizado con la aplicación de la Ley de Participación Popular que hace una descentralización ya no política sino administrativa a nivel de los municipios.

La Ley de Participación Popular que descentraliza administrativamente el Estado vía municipios, sumada a la integración mayor de las elites regionales, especialmente cruceñas, a la estructura del Estado centralista a través de los partidos MNR, MIR y ADN, acabará el ímpetu descentralizador de los años ochenta y llevará a las elites empresariales cruceñas a ocupar fundamentales posiciones de poder en la estructura estatal que acompañará las reformas de libre mercado de toda la etapa neoliberal.

Sin embargo, desde hace cinco años, la crisis estatal iniciada ha debilitado y hecho retroceder la hegemonía neoliberal (partidaria e ideológica) instaurada desde 1985. Pero, este debilitamiento ha dejado irresuelto el nuevo liderazgo nacional. Por una parte, las ideas conservadoras del orden establecido se han atrincherado y reforzado en las regiones del oriente y el sur del país (Santa Cruz, Beni, Tarija), en tanto que las ideas y proyectos renovadores y progresistas han avanzado y han logrado un liderazgo en las zonas occidentales del país, aunque sin que ninguno de estos proyectos políticos logre irradiarse ni expandirse como proyecto nacional, lo que ha dado lugar a una regionalización de los liderazgos.

En ese sentido, la actual revitalización de la demanda autonomista en Santa Cruz, a la cabeza de los partidos tradicionales (MNR/MIR/ADN) y las corporaciones empresariales regionales (CAO/CAINCO), es una clara sublevación empresario-regional contra las demandas e ímpetus indígena-populares de transformación económica y política; es un levantamiento burgués de reacción a los procesos de cambio propugnados por los movimientos sociales. Se trata de una serie de manifestaciones, movilizaciones y acciones directas dirigidas por el empresariado regional, en torno a objetivos y convocatorias de los sectores empresariales que buscan preservar el orden económico y establecer un blindaje político regional a esos intereses en retirada en el resto del país. Lo llamativo es que esta convocatoria tiene recepción social, apoyo regional de sectores laborales y populares, lo que permite hablar de la presencia activa de una hegemonía, de un liderazgo empresarial en la región. A diferencia de lo que sucede en las zonas de occidente, donde los movimientos sociales populares e indígenas han construido un sentido común generalizado que explica las carencias sociales, la falta de empleo, la discriminación y la crisis debido al "modelo neoliberal", en oriente, los mismos problemas que atraviesan los sectores subalternos son expli-

Álvaro García Linera

cados por el “centralismo”, que es una ideología y visión del mundo del mundo administrada por las elites empresariales, lo que permite entender su liderazgo y base social. Esto ciertamente tiene que ver con la debilidad del tejido social popular en Santa Cruz, con la ausencia de autonomía política de los sectores populares, etc., que permitan que las demandas y frustraciones de varios sectores populares urbanos, y en particular de jóvenes migrantes andinos, se articulen individualmente en las ofertas que hacen las elites empresariales.

Esta rebelión de las elites regionales en contra del gobierno tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que en los últimos dieciséis meses, desde octubre de 2003, las elites empresariales cruceñas han perdido el control de una buena parte de los resortes del poder político que durante diecinueve años administraron de manera ininterrumpida. Desde 1985, independientemente de los gobiernos del MNR, ADN o MIR, las elites cruceñas ocuparon cargos ministeriales clave en la definición de las políticas económicas del país; estaban posesionados en niveles de dirección de los principales partidos de gobierno y controlaban áreas de decisión en el parlamento. Esto les permitió influir de manera directa en la definición de políticas públicas que favorecieron su potenciamiento como moderna fracción empresarial. A su modo, la burguesía cruceña desde hace treinta años, y con particular énfasis en los últimos quince años, ha hecho lo que desde la historia republicana ha realizado todo empresariado dominante: utilizar el poder político para ampliar, extender y proteger su capitalización económica empresarial sectorial.

El desplazamiento de los hilos de poder vino inicialmente con la renuncia de Sánchez de Lozada, que creó una serie de vínculos de fidelidad y apoyo con el empresariado cruceño que se mantuvo hasta el último minuto en que el ex presidente partía a su “auto-exilio” en octubre de 2003. El segundo momento de esta pérdida de poder vino por el debilitamiento político de los partidos donde este empresariado cruceño controlaba estructuras de influencia y decisión (MNR y MIR); el tercer momento de esta pérdida de control personal de los aparatos de poder gubernamental se dio cuando el presidente Mesa colocó en ministerios a representantes cruceños provenientes de *elites* intelectuales y civiles distantes de las elites económicas regionales. Y el punto final de esta pérdida de los resortes del poder gubernamental vino con los resultados de las elecciones municipales, que acabaron por debilitar y casi marginalizar de las esferas de decisión política, a los partidos que tradicionalmente habían sido el centro de la política nacional (MNR, MIR, ADN). A partir de entonces, era sólo cuestión de

Crisis estatal y época de revolución

tiempo para una ofensiva empresarial, de manera corporativa, que es su último reducto de agregación de intereses (Comité Cívico y gremios empresariales), a fin de recobrar posiciones en un esquema de poder que se ha desprendido de su manejo directo y personal.

El aumento del diésel en diciembre de 2004 fue el pretexto que le permitió movilizar canalizar y liderar un malestar social a la defensa de intereses empresariales cruceños que, por cierto, son los que más se benefician con la subvención de ese carburante por parte del Estado. La actual sublevación empresario-regional es por tanto una lucha abierta por el poder de Estado, por el control de la totalidad, o de una parte sustancial (tema de tierras, régimen de impuestos, modelo económico), de los mecanismos de toma de decisión sobre la manera de gestionar los recursos públicos. El hecho de que se trata de un empresariado regional y que las fuerzas armadas tengan de momento una actitud neutral o distante al reclamo empresarial (debido a sus insinuaciones escisionistas con las que a veces lo presentan los dirigentes cívicos), limita la posibilidad de un cambio total de la estructura de poder a su favor, aunque la fuerza que tienen puede obligar a un tránsito gradual hacia una retoma de la influencia que tenían antes de octubre.

Por las características de esta lucha por el poder gubernamental, por lo que estos sectores empresariales defendieron y buscan defender y por la manera de haber acumulado poder económico en los últimos años, esta lucha es también por re-direccionar, por detener el conjunto de reformas políticas y económicas que están en marcha debido a la presión popular-indígena de occidente, ya que la continuación de esas reformas puede afectar directamente los mecanismos de poder económico empresarial (asamblea constituyente que modifique el sistema de propiedad de la tierra, nacionalización de los hidrocarburos que ponga freno a la esperanza de una regalías petroleras regionalizadas, etc.). De ahí que esta lucha por el poder sea a la vez una resistencia a la continuidad de la llamada “agenda de octubre” resultante de la rebelión urbana-rural de octubre de 2003.

Sin embargo, esta lucha empresarial por el control de las estructuras decisionales del poder político no toma la forma de una lucha “nacional”, general, de control total del Estado, lo que exigiría de parte del empresariado cruceño una serie de propuestas, de convocatorias dirigidas a movilizar al resto del país, a articular intereses de otros sectores sociales que no sean solamente los regionales del oriente. Esto, a las *elites*, les resulta imposible, ya que el horizonte de país que propugnan y defienden (libre mercado, inversión externa, racismo, etc.) ha sido

Álvaro García Linera

derrotado en toda la región de occidente en octubre de 2003 y es una ideología cansada y en retirada, al menos temporalmente. De ahí que el empresariado cruceño haya apostado a una regionalización de su lucha política vía la demanda de autonomía. En sentido estricto, la demanda de autonomía de los empresarios cruceños se presenta, por tanto, como una lucha defensiva, de repliegue sobre su zona de irradiación básica (Santa Cruz) y, con ello, el abandono de la lucha por una hegemonía nacional que sienten imposible. La lucha por la autonomía cruceña es, pues, el retroceso político respecto a lo que anteriormente controlaban las elites cruceñas (aparatos de estado “nacional”), y la constatación de los límites regionales de una burguesía que no se anima a intentar dirigir, política, económica y culturalmente, el país, y se repliega a su dominio regional para disputar ahí el control, compartido con las petroleras, del excedente gasífero existente. La autonomía cruceña, convertida en la bandera central de la demanda empresarial, es por tanto la lucha por el poder político, pero en su dimensión fraccionada, regionalizada, parcial y la materialización del abandono de la disputa del poder general, “nacional” del país. Su victoria, en caso de darse, no resolverá la ausencia de hegemonía nacional, de liderazgo y horizonte general compartido por la mayoría de la sociedad; radicalizará la regionalización de la lucha de clases, de los liderazgos políticos y de los proyectos de país, incrementando las tendencias escisionistas que siempre han anidado larvariamente en el comportamiento político de los sujetos sociales de oriente y occidente.

Con todo, y pese a este carecer local de la disputa del poder político, la demanda de la burguesía cruceña y las empresas petroleras que la secundan está cuestionando directamente no sólo a un gobierno, sino a la estructura del Estado, a su base constitucional y, ante todo, al control de los recursos imprescindibles para cualquier estrategia de desarrollo económico nacional en las siguientes décadas: tierra e hidrocarburos.

Se trata por tanto de una sublevación reaccionaria que está poniendo en duda la viabilidad del Estado y, lo más riesgoso, el sustento material económico de cualquier proceso de reforma o de transformaciones progresistas que deseen impulsar los sectores populares e indígenas del país.

Está claro, entonces, que la actual demanda autonómica del Comité Cívico de Santa Cruz, si bien tiene una función democratizadora, es ante todo un pretexto de elite para contener proyectos de reforma económica y política desneoliberalizantes. Resulta entonces que en torno a la agenda cruceña, parte de los sectores políticamente derrotados en octubre ha comenzado nuevamente a rear-

Crisis estatal y época de revolución

ticularse; hablamos del MNR, hablamos del MIR, del ADN, que sienten a Santa Cruz y su movimiento regional como un territorio desde el cual pueden comenzar nuevamente a irradiar propuestas y liderazgo político.

En lo que se refiere al actual debate sobre si primero debería realizarse el referéndum por la autonomía o la elección de constituyentes no es un debate falso; es un debate donde se posicionan intereses colectivos de poder. Las fuerzas políticas y económicas que quieren primero autonomía, buscan posicionar la autonomía a nivel departamental para postergar la asamblea constituyente de manera indefinida porque se sienten aún minoría electoral; sienten que ahí no podrían jugar un papel dirigente, como lo venían haciendo en todas las elecciones nacionales previas, más aun cuando los partidos que les permitían convertir la minoría demográfica en mayoría política (ADN, MIR, MNR) están en un proceso de debilitamiento estructural. Los que buscan la asamblea constituyente, en cambio, quieren hacerla antes o al mismo momento de la autonomía, justamente para obligar a este bloque oriental a participar dentro de la asamblea constituyente, en la creencia de que en la asamblea constituyente estos bloques sociales, populares e indígenas, tendrán mayor presencia y mayoría para promover cambios en los regímenes económicos, de propiedad y de derechos sociales que beneficien a los sectores anteriormente excluidos.

Como se ve en conjunto, alrededor del debate sobre autonomías, están en juego las estrategias de posicionamiento de cada una de las fuerzas sociales y políticas del país y, por ello, es importante que al momento de hacer una lectura contextual de este tema se sepa el telón de fondo de los distintos argumentos legitimadores que utilizan los distintos actores. En sentido estricto, en torno a la agenda de la autonomía se están jugando temas de poder políticos de grupos, clases y facciones sociales.

Campo político polarizado y empate catastrófico

Sobre este escenario de crisis estatal de dos dimensiones, a saber, crisis del Estado neoliberal, crisis de los componentes republicanos monoculturales y centralistas del Estado boliviano, se está produciendo un creciente proceso de polarización social y política, entendida como confrontación de proyectos contrapuestos, de dos miradas distintas de entender la vida, la economía, el futuro y el porvenir.

Álvaro García Linera

Por una parte podemos ubicar a un proyecto neoconservador, liberal, que en lo económico sigue apostando a una economía abierta, globalizada, de inversión externa, de débil intervención del Estado. El otro polo apuesta hacia una economía más centrada en el mercado interno, con mayor presencia de un Estado productivo y que intenta recuperar la dinámica económica de sectores tradicionales en el campo, comunidades, en el mundo urbano familiar microempresarial.

En lo político, el primero es un proyecto que apunta hacia una lectura partidaria de la política o corporativa empresarial de la política, manteniendo la monoculturalidad del Estado, con liderazgos de tipo tradicional de las viejas *elites* políticas. El otro apunta a un tipo de comunitarismo sindical, una reivindicación de la multiculturalidad, de la presencia indígena en la toma de decisiones y está encabezada por liderazgos básicamente indígenas.

La primera nos da una confrontación de carácter clasista, la segunda una confrontación de carácter étnico y existe una tercera que nos va a dar una confrontación regional. Por una parte estas fuerzas neoconservadoras—que no es un adjetivo, en la medida en que pretenden preservar lo que existe con algunas modificaciones—si bien están presentes en todo el país, tienen su fuerza dominante en sectores del oriente del país. En tanto que las fuerzas renovadoras que están presentes en las distintas regiones su mayor capacidad de movilización, tanto electoral como de acción colectiva, están en las zonas de los valles y del altiplano. Entonces Bolivia está viviendo una polarización clasista, étnica y regional simultáneamente.

En conjunto se puede decir que estamos ante un escenario de un conflicto generalizado por la redistribución del poder estatal en Bolivia entre sectores que tradicionalmente tenían poder y sectores nuevos, anteriormente marginados de las estructuras decisionales del país, que ahora pugnan por hacerse cargo de la administración del Estado. Pero lo característico de esta pugna por el poder es que ninguno de los bloques tiene la capacidad de imponerse sobre el otro.

Tenemos entonces polaridades que atraviesan a las regiones, a las clases y a las identidades étnicas; pero ninguna de estas polaridades o bloques de poder tiene la suficiente capacidad de imponerse sobre la otra ni de seducirla; es decir, en términos gramscianos estamos ante un “empate catastrófico”. Un empate catastrófico surge cuando no existe la capacidad de una hegemonía completa sino de una confrontación irresuelta por esa hegemonía entre dos protohegemonías, y esto genera procesos de confrontaciones permanentes de baja intensidad, de enfren-

Crisis estatal y época de revolución

tamientos, desgastes mutuos que impiden que alguno de ellos expanda su liderazgo sobre el resto de la sociedad.

De ahí que lo más sensato sea pensar que la única manera de resolución de este “empate” sea precisamente la del armisticio o, lo que es lo mismo, la de una redistribución pactada del poder estatal, lo que llevaría necesariamente a una ampliación de derechos de los sectores más excluidos y a una redistribución negociada de las oportunidades económicas de la sociedad.

Indianismo y marxismo. El desencuentro de dos razones revolucionarias*

En Bolivia, el antiguo marxismo no es significativo ni política ni intelectualmente, y el marxismo crítico, proveniente de una nueva generación intelectual, tiene una influencia reducida y círculos de producción aún limitados.

Por el contrario, el indianismo, poco a poco, se ha ido constituyendo en una narrativa de resistencia que en estos últimos tiempos se propuso como una auténtica opción de poder.

En los últimos cien años, en Bolivia se han desarrollado cinco grandes ideologías o “concepciones del mundo” de carácter contestatario y emancipatorio. La primera de estas narrativas de emancipación social fue el anarquismo, que logró articular las experiencias y demandas de sectores laborales urbanos vinculados al trabajo artesanal y obrero en pequeña escala y al comercio. Presente desde fines del siglo XIX en algunos ámbitos laborales urbanos, su influencia más notable se da en los años treinta y cuarenta del siglo XX, cuando logra estructurar federaciones de asociaciones agremiadas de manera horizontal en torno a un programa de conquista de derechos laborales y a la formación autónoma de una cultura libertaria entre sus afiliados.

Otra ideología que ancla sus fundamentos en las experiencias de siglos anteriores es la que podríamos llamar indianismo de resistencia, que surgió después de la derrota de la sublevación y del gobierno indígena dirigido por Zárate Willka y Juan Lero, en 1899. Reprimido este proyecto de poder nacional indígena, el movimiento étnico asumió una actitud de renovación del pacto de subalternidad con el Estado mediante la defensa de las tierras comunitarias y el acceso al sistema educativo.

* En *Revista Bonataria* (La Paz) N° 2, marzo-abril de 2005.

Álvaro García Linera

Sustentado en una cultura oral de resistencia, el movimiento indígena, predominantemente aimara, combinará de manera fragmentada la negociación de sus autoridades originarias con la sublevación local hasta ser sustituido, como horizonte explicador del mundo en las comunidades, por el nacionalismo revolucionario a mediados de siglo.

El nacionalismo revolucionario y el marxismo primitivo serán dos narrativas políticas que emergerán simultáneamente con vigor después de la Guerra del Chaco, en sectores relativamente parecidos (clases medias letradas), con propuestas similares (modernización económica y construcción del Estado nacional) y enfrentados a un mismo adversario, el viejo régimen oligárquico y patronal.

A diferencia de este marxismo naciente, para el cual el problema del poder era un tema retórico que buscaba ser resuelto en la fidelidad canónica al texto escrito, el nacionalismo revolucionario, desde su inicio, se perfilará como una ideología portadora de una clara voluntad de poder que debía ser resuelta de manera práctica. No es casual que este pensamiento se acercara a la oficialidad del ejército—la institución clave en la definición del poder estatal— y que varios de sus promotores, como Paz Estenssoro, participaran en gestiones de los cortos gobiernos progresistas militares que erosionaron la hegemonía política conservadora de la época. Tampoco es casual que, con el tiempo, los nacionalistas revolucionarios combinaran de manera decidida sublevaciones (1949), con golpes de Estado (1952) y participación electoral como muestra de una clara ambición de poder.

Obtenido el liderazgo de la revolución de 1952 por hechos y propuestas prácticas, el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) hará que su proyecto partidario devenga en toda una concepción del mundo emitida desde el Estado, dando lugar a una reforma moral e intelectual que creará una hegemonía político cultural de treinta y cinco años de duración en toda la sociedad boliviana, independientemente de si los sucesivos gobiernos fueran civiles o militares.

El marxismo primitivo

Si bien se puede hablar de una presencia de pensamiento marxista desde los años veinte, a través de la actividad de intelectuales aislados como Tristan

Crisis estatal y época de revolución

Marof⁴⁶⁰, el marxismo, como cultura política en disputa por la hegemonía ideológica cobrará fuerza en los años cuarenta, por medio de la actividad partidaria del Partido de Izquierda Revolucionaria (PIR), el Partido Obrero Revolucionario (POR) y la producción intelectual de sus dirigentes (Guillermo Lora, José Aguirre Gainsborg, José Antonio Arce, Arturo Urquidi, etcétera).

El surgimiento del marxismo y su recepción en el ámbito social vendrá marcado por dos procesos constitutivos. El primero radica en una producción ideológica directamente vinculada a la lucha política, lo que conjuró la tentación de un “marxismo de cátedra”. Los principales intelectuales que se adscriben a esa corriente participan del activismo político, ya sea en la lucha parlamentaria o en la organización de las masas, lo que influirá tanto en las limitaciones teóricas de la producción intelectual de la época –más apegada a una repetición de los sencillos esquemas de los manuales de economía y filosofía soviéticos–, como en la constante articulación de sus reflexiones con el acontecer político práctico de la sociedad.

El otro hecho notable de este nacimiento lo representa la recepción del marxismo, y del propio nacionalismo revolucionario en el mundo laboral, que viene precedida de una modificación de la composición de clase de los núcleos económicamente más importantes del proletariado minero y fabril boliviano, que se hallan en el pleno tránsito del “obrero artesanal de empresa” al “obrero de oficio de gran empresa”. Esto significa que el marxismo se enraíza en el *locus* obrero en el momento en que se está consolidando la mutación de la centralidad de los saberes individuales del trabajo y del virtuosismo tradicional artesanal que caracterizaba la actividad productiva en los talleres y las industrias, en la primacía del soporte técnico industrial y en una división del trabajo eslabonada en el tiempo de los obreros industriales en las empresas mineras de estaño y de las fábricas, principalmente textiles urbanas⁴⁶¹.

Se trata, por tanto, de un proletariado que interioriza la racionalidad técnica de la modernización capitalista de gran empresa, y que está subjetivamente dispuesto a una razón del mundo guiada por la fe en la técnica como principal fuerza productiva, en la homogeneización laboral y la modernización industrial del país. Se trata ciertamente del surgimiento de un tipo de proletariado

⁴⁶⁰ Marof, Tristan 1926 *La justicia del inca* (Bruselas).

⁴⁶¹ García Linera, Álvaro 2000 *La condición obrera. Estructuras materiales y simbólicas del proletariado de la minería mediana* (La Paz: CIDES/UMSA/La Comuna).

Álvaro García Linera

que se halla en proceso de interiorización de la subsunción real del trabajo al capital como un prejuicio de masa⁴⁶² y será sobre esta nueva subjetividad proletaria que ocupará el centro de las actividades económicas fundamentales del país, que el marxismo, con un discurso de racionalización modernizante de la sociedad, logrará enraizarse durante décadas.

El marxismo de esta primera época es, sin lugar a dudas, una ideología de modernización industrial del país en lo económico, y de consolidación del Estado nacional en lo político. En el fondo, todo el programa revolucionario de los distintos marxismos de esta etapa, hasta los años ochenta, tendrá –aun cuando lleve diversos nombres, la revolución “proletaria” del POR, “democrática-burguesa en transición al socialismo” del Partido Comunista Boliviano (PCB), de “liberación nacional” del Ejército de Liberación Nacional (ELN), “socialista” del Partido Socialista 1 (PS-1)–objetivo similares: despliegue incesante de la modernidad capitalista del trabajo, sustitución de las relaciones “tradicionales” de producción, especialmente de la comunidad campesina que deberá “colectivizarse” u “obrerizarse”, homogeneización cultural para consolidar el Estado y una creciente estatalización de las actividades productivas como base de una economía planificada y de una cohesión nacional-estatal de la sociedad. En el fondo, este marxismo primitivo, por sus fuentes y sus objetivos, será una especie de nacionalismo revolucionario radicalizado y de ahí que no sea raro que los militantes y los cuadros marxistas de las fábricas y minas, especialmente “poristas” y “piristas”, se hayan incorporado rápidamente al partido triunfador de abril del 52, o que la masa proletaria de influencia de estos partidos marxistas, en los hechos, haya actuado bajo el comando ideológico movimientista en los momentos de la definición política. De esta forma, mientras que en los congresos mineros o fabriles se podía aprobar el programa de transición trotskista, en las elecciones presidenciales y en el comportamiento político se era movimientista, pues, en el fondo, lo que diferenciaba a marxistas y nacionalistas no era tanto el discurso, modernizante, estatalista y homogeneizante, sino la voluntad de poder de los últimos para llevar adelante lo prometido.

Con todo, el marxismo llegó a formar una cultura política extendida en sectores obreros, asalariados y estudiantiles basada en la primacía de la identidad obrera por encima de otras identidades, en la convicción acerca del papel pro-

⁴⁶² Zavaleta, René 1986 *Lo nacional popular en Bolivia* (México: Siglo XXI).

Crisis estatal y época de revolución

gresista de la tecnología industrial en la estructuración de la economía, del papel central del Estado en la propiedad y distribución de la riqueza, de la nacionalización cultural de la sociedad en torno a estos moldes y de la “inferioridad” histórica y clasista de las sociedades campesinas mayoritarias en el país.

Esta narrativa modernista y teleológica de la historia, por lo general adaptada de los manuales de economía y filosofía, creará un bloqueo cognitivo y una imposibilidad epistemológica sobre dos realidades que serán el punto de partida de otro proyecto de emancipación que con el tiempo se sobrepondrá a la propia ideología marxista: la temática campesina y étnica del país.

Considerada desde la perspectiva del capitalismo europeo, cuna del proletariado llamado a hacer la revolución y a partir de la disolución de las relaciones tradicionales campesinas, la izquierda marxista ubicará a la realidad agraria como representante del “atraso” que debe dar paso al “progreso” de la industria que permitiría pensar en la emancipación. En ese sentido, el agro se presentará como un lastre para los sujetos de la revolución social, los proletarios, que deberán buscar la mejor manera de “arrastrar” a los “pequeños propietarios” de la tierra. La lectura clasista de la realidad agraria que hará el marxismo no vendrá por el lado de la subsunción formal y real, que hubiera permitido develar las condiciones de explotación de este sector productivo; se lo hará desde el esquema—prejuicio—del enclavamiento a partir de la propiedad, con lo que trabajadores directos quedarán en el saquillo de “pequeños burgueses” de dudosa fidelidad revolucionaria por su apego a la propiedad.

En este esquema, la comunidad y sus relaciones productivas sencillamente no existirán en el horizonte interpretativo de este marxismo⁴⁶³ y mucho menos cualquier otra identidad social que no sea la estrictamente económica; en este caso, campesina. Los repertorios culturales de las clases sociales, la diversidad identitaria de la sociedad o la existencia de naciones y pueblos indígenas serán un no-lugar en la literatura y en la estrategia izquierdista, a excepción de Osvaldo Sáenz⁴⁶⁴, cuyo pionero aporte rápidamente será silenciado por la vulgata partidaria de “clases” sociales identificadas, ni siquiera por la estructura de las relaciones de producción y reproducción social, sino tan sólo por las rela-

⁴⁶³ Notables excepciones de una lectura marxista mucho más consistente sobre el tema agrario en Bolivia se pueden hallar en Paz, Danilo 1983 *Estructura agraria en Bolivia* (La Paz: Editorial Popular); y Echazu, Jorge 1983 *Los problemas agrarios campesinos de Bolivia* (La Paz: CEUB/FAO).

⁴⁶⁴ Ovando Sáenz, J. 1984 *El problema nacional y colonial en Bolivia*.

Álvaro García Linera

ciones de propiedad, lo que producirá un reduccionismo clasista de la realidad social boliviana y un reduccionismo jurídicista y legalista de la conformación de las “clases sociales”⁴⁶⁵.

Para este marxismo no había ni indios ni comunidad, con lo que una de las más ricas vetas del pensamiento marxista clásico queda bloqueada y rechazada como herramienta interpretativa de la realidad boliviana⁴⁶⁶; además, esta posición obligará al emergente indianismo político a afirmarse precisamente en combate ideológico, tanto contra las corrientes nacionalistas como contra las marxistas, que rechazaban y negaban la temática comunitaria agraria y étnico nacional como fuerzas productivas políticas capaces de servir de poderes regenerativos de la estructura social, tal como precisamente lo hará el indianismo.

Las posteriores conversiones respecto a esa temática por parte de la izquierda a fines de los ochenta, a partir de las cuales se “descubrirán” a la comunidad y la diversidad nacionalista del país, no sólo serán meramente testimoniales—pues la izquierda marxista primitiva había entrado en franca decadencia intelectual y marginalidad social—, sino que además la temática será abordada de la misma manera superficial e instrumental con la que décadas atrás fue interpretada la centralidad proletaria.

Al final, una lectura mucho más exhaustiva de la temática indígena y comunitaria vendrá de la mano de un nuevo marxismo crítico y carente de auspicio estatal que, desde finales del siglo XX y a principios del XXI, apoyándose en las reflexiones avanzadas por Zavaleta, buscará una reconciliación de indianismo y marxismo, capaz de articular los procesos de producción de conocimiento local con los universales⁴⁶⁷.

⁴⁶⁵ Arce, José Antonio 1963 *Sociología marxista* (Oruro); Lora, Guillermo (1980) *Historia del movimiento obrero* (La Paz: Los Amigos del Libro) Tomo III.

⁴⁶⁶ Sobre la comunidad en el pensamiento de Marx, revisar 1980 “Escritos sobre Rusia II. El porvenir de la comuna rural rusa”, en *PyP* (México) N° 90; 1988 *Los apuntes etnológicos de Karl Marx* (España: Editorial Pablo Iglesias/Siglo XXI).

⁴⁶⁷ Tapia, Luis 2002 *La condición multisocietal* (La Paz: CIDES-UMSA-Muela del Diablo); Prada, Raúl 2004 *Largo octubre* (La Paz: Plural); AA. VV. 2001 *Tiempos de rebelión* (La Paz: La Comuna); AA. VV. 2004 *Memorias de octubre* (La Paz: Comuna).

Crisis estatal y época de revolución

El indianismo

El voto universal, la reforma agraria, que acabó con el latifundio en el altiplano y los valles, y la educación gratuita y universal, hicieron del ideario del nacionalismo revolucionario un horizonte de época que envolvió buena parte del imaginario de las comunidades campesinas que hallaron en este modo de ciudadanización, de reconocimiento y movilidad social, una convocatoria nacionalizadora y culturalmente homogeneizante, capaz de desplegar y diluir el programa nacional étnico de resistencia gestado décadas atrás. Fueron momentos de una creciente des-etnización del discurso e ideario campesino, una apuesta a la inclusión imaginada en el proyecto de cohesión cultural mestiza irradiada desde el Estado y de la conversión de los nacientes sindicatos campesinos en la base de apoyo del Estado nacionalista, tanto en su fase democrática de masas (1952-1964), como en la primera etapa de la fase dictatorial (1964-1974).

El sustento material de este período de hegemonía nacional estatal será la creciente diferenciación social en el campo y permitirá mecanismos de movilidad interna vía los mercados y la ampliación de la base mercantil de la economía rural, la acelerada descampesinización que llevará a un rápido crecimiento de las ciudades grandes e intermedias y a la flexibilidad del mercado de trabajo urbano que habilitará la creencia de una movilidad campo-ciudad exitosa mediante el acceso al trabajo asalariado estable y el ingreso a la educación superior como modos de ascenso social.

Los primeros fracasos de este proyecto de modernización económica y de nacionalización de la sociedad se comenzarán a manifestar en los años setenta, cuando la etnicidad, bajo la forma del apellido, el idioma y el color de piel, será reactualizada por las elites dominantes como uno más de los mecanismos de selección para la movilidad social, renovando la vieja lógica colonial de enclausamiento y desclasamiento social que se tenía, junto a las redes sociales y a la capacidad económica, como los principales medios de ascenso y descenso social.

Ello, sumado a la estrechez del mercado laboral moderno, incapaz de acoger a la creciente migración, habilitará un espacio de naciente disponibilidad para el resurgimiento de la nueva visión del mundo indianista que, en estos últimos treinta y cuatro años, ha transitado varios períodos: el período formativo, el período de la cooptación estatal y el período de su conversión en estrategia de poder.

Álvaro García Linera

Gestación del indianismo katarista

El primer período es el de la gestación del indianismo katarista, en tanto construcción discursiva, política y cultural formadora de fronteras culturales como modo de visibilización de exclusiones y jerarquías sociales. Inicialmente el indianismo katarista nace como discurso político que comienza a resignificar de manera sistemática la historia, la lengua y la cultura. En unos casos, esta formación discursiva revisará la historia colonial y republicana para mostrar las injusticias, las usurpaciones y discriminaciones de las que serán objeto los pueblos indígenas en la gestión de las riquezas y poderes sociales. En otros casos, se denunciarán las trabas en los procesos de ciudadanización y de ascenso social ofertados por el proyecto mestizo nacionalista iniciado en 1952. En ambas vertientes complementarias, se trata de un discurso de denuncia e interpelatorio que, asentado en la revisión de la historia, echa en cara la imposibilidad de cumplir los compromisos de ciudadanía, de mestizaje, de igualación política y cultural, con la cual el nacionalismo se acercó al mundo indígena campesino después de 1952.

Esto sucederá desde los años setenta, en plena vigencia del modelo estatal centralista y productor, y se llevará adelante por medio de la actividad de una intelectualidad aimara migrante, temporal o permanente, que accede a procesos de escolarización superior y vida urbana, pero manteniendo aún vínculos con las comunidades rurales y sus sistemas de autoridad sindical. Estos intelectuales, en círculos políticos autónomos o en pequeñas empresas culturales (el fútbol, los programas de radio, charlas en las plazas, etc.)⁴⁶⁸, van construyendo, entre dirigentes de sindicatos agrarios, redes de comunicación y de relectura de la historia, la lengua y la etnicidad que comienzan a disputar la legitimidad de los discursos campesinistas con los que el Estado y la izquierda convocaban al mundo indígena.

El aporte fundamental de este período es la reinención de la *indianitud*, pero ya no como estigma, sino como sujeto de emancipación, como designio histórico, como proyecto político. Se trata de un auténtico renacimiento discursivo del indio a través de la reivindicación y reinención de su historia, de su pasado, de sus prácticas culturales, de sus penurias, de sus virtudes, que ha de tener un efecto práctico en la formación de auto-identificaciones y formas organizativas.

⁴⁶⁸ Hurtado, Javier 1985 *El katarismo* (La Paz: Hisbol).

Crisis estatal y época de revolución

En esta primera etapa del período formativo se destacará la obra de Fausto Reinaga, que puede ser considerado como el intelectual del indianismo más relevante e influyente de todo este período histórico. Su obra está dirigida a construir una identidad y en la medida en que no hay identidad colectiva que se construya, por lo menos en un inicio, más que afirmándose frente y en contra de las otras identidades, el indianismo en esta época no sólo se diferenciará de la “otra” Bolivia mestiza y colonial, sino también de la izquierda obrerista, fuertemente asociada al proyecto homogeneizante y modernista del Estado nacionalista.

De entrada, el indianismo rompe lanzas frente al marxismo y se le enfrenta con la misma vehemencia con la que critica a otra ideología fuerte de la época, el cristianismo, considerados ambos como los principales componentes ideológicos de la dominación colonial contemporánea. En esta descalificación indianista del marxismo como proyecto emancipador ha de contribuir la propia actitud de los partidos de izquierda que seguirán subalternizando al campesino frente a los obreros, se opondrán a la problematización de la temática nacional indígena en el país y, como hoy lo hacen las clases altas, considerarán un retroceso histórico respecto de la “modernidad” cualquier referencia a un proyecto de emancipación sustentado en potencialidades comunitarias de la sociedad agraria.

A partir de este fortalecimiento, en oposición, el discurso katarista indianista, a fines de los años setenta, se va a dividir en cuatro grandes vertientes. La primera, la sindical, que dará lugar a la formación de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), hecho que sella simbólicamente la ruptura del movimiento de los sindicatos campesinos con el Estado nacionalista en general y, en particular, con el pacto militar campesino que había inaugurado una tutela militar sobre la organización campesina. La otra vertiente es la política partidaria, no solamente con la formación del Partido Indio, a fines de los años sesenta, sino del Movimiento Indio Túpak Katari (MITKA) y el Movimiento Revolucionario Túpak Katari (MRTK), que van a incorporarse, de manera frustrada, en varias competencias electorales hasta fines de los años ochenta. La tercera vertiente, al lado de la política y la sindical, será la corriente académica, historiográfica y de investigación sociológica. Se ha dicho que todo nacionalismo es en el fondo un revisionismo histórico y de ahí que no sea raro que una amplia generación de migrantes aimaras, que entran al mundo universitario entre los años setenta y ochenta, se dedique precisamente a llevar

Álvaro García Linera

adelante, de manera rigurosa, este revisionismo histórico mediante el estudio de casos de levantamientos, de caudillos, de reivindicaciones indígenas desde la Colonia hasta nuestros días.

Si bien hay varias corrientes en este momento, la fuerza del movimiento indianista katarista estará centrada en la CSUTCB. Pero como en toda identidad de los subalternos, esta fuerza de movilización no dejará de presentar el trenzado de múltiples pisos estratégicos de interpelación al Estado. Así, si bien, por una parte es posible encontrar una fuerte retórica etnicista en los discursos de los dirigentes, en la simbología usada para identificarse –los retratos de los líderes indígenas, la *wiphala*–, en los hechos, la fuerza discursiva movilizable de la CSUTCB ha de estar básicamente centrada en reivindicaciones de tipo clasista y económica, como aquellas que dieron lugar al primer gran bloqueo de caminos de la flamante dirección sindical con Genaro Flores a la cabeza, en diciembre de 1979. Las movilizaciones de la CSUTCB con predominio en la convocatoria política y étnico nacional por encima de las reivindicaciones estrictamente campesinas, recién se darán con las rebeliones del año 2000, 2001 y 2003.

Un segundo momento de este período de formación discursiva y de *elite* de la identidad aimara se va a producir cuando, desde los primeros años de la década del ochenta, hay una lenta pero creciente descentralización de este discurso; los ideólogos y activistas del indianismo katarista se fragmentan dando lugar a tres grandes corrientes. La culturalista, que se refugia en el ámbito de la música, la religiosidad y que hoy en día es denominada como la de los “pachamámicos”. Básicamente es un discurso que ha perdido la carga política inicial y tiene una fuerte carga de folclorización de la indianidad. Una segunda vertiente, menos urbana que la anterior, se ha denominado la de los discursos políticos “integracionistas”, en la medida en que enarbola una reivindicación del ser indígena como fuerza de presión para obtener ciertos reconocimientos en el orden estatal vigente. Se trata de una formación discursiva de lo indígena en tanto sujeto querellante, demandante de reconocimiento por parte del Estado, para incorporarse a la estatalidad y ciudadanía vigente, pero sin perder por ello sus particularidades culturales. El ala katarista del movimiento de reivindicación de la indianidad es la que dará cuerpo a esta posición. Aquí el indígena es la ausencia de igualdad ante el Estado por una pertenencia cultural (aimara y quechua) que deviene así en signo identificador de una carencia de derechos (la igualdad), de un porvenir (la ciudadanía plena) y de una distinción identitaria (la multiculturalidad).

Crisis estatal y época de revolución

Este discurso construye su imaginario a través de la denuncia de la existencia de dos tipos de ciudadanía: la de “primera clase”, monopolizada por los *q'aras*, y la ciudadanía de “segunda clase”, a la que pertenecerían los indígenas. Mediante esta jerarquización de los niveles de ciudadanía en la sociedad boliviana, lo que este discurso realiza es una lucha por el reconocimiento de la diferencia, pero para lograr la supresión de ésta y alcanzar la igualación y homogeneización, al menos política, en lo que se considera la “ciudadanía de primera clase”.

En este caso, la diferencia no es enarbolada como portadora de derechos, lo que requeriría pensar en una ciudadanía multicultural o en la reivindicación de derechos políticos colectivos, ciudadanía diferenciadas y estructuras político institucionales plurales, pero con iguales prerrogativas políticas frente al Estado. La diferencia es aquí un paso intermedio a la nivelación, por lo que el horizonte político con el que el katarismo proyecta al indígena sigue siendo el de la ciudadanía estatal exhibida por las elites dominantes desde hace décadas atrás. De cierto modo, la distancia con el discurso modernizador del nacionalismo revolucionario no radica en este destino fatal de lo que ha de entenderse por ciudadanía y marco institucional para ejercerla, sino en el reconocimiento de la pluralidad cultural para poder acceder a ella, que será precisamente el aporte del modesto discurso liberal frente a la problemática de los “pueblos” y “etnias”. No será raro, por tanto, que mucho de los personajes del katarismo, elaboradores de este discurso, colaboren posteriormente con propuestas modernizantes y multiculturalistas del antiguo partido nacionalista que en 1993 llegará otra vez al gobierno.

Paralelamente, en los años ochenta, esta corriente ideológica, más vinculada al sindicalismo campesino, será la más propensa a acercarse a las corrientes marxistas y al aún predominante movimiento obrero organizado en torno a la Central Obrera Boliviana (COB). Por ejemplo, Genaro Flores logrará establecer alianzas con el frente izquierdista Unidad Democrática Popular (UDP) en las elecciones de 1980 y algunos de sus cuadros políticos se incorporarán a la gestión de gobierno de Siles Zuazo.

En los años posteriores, dirigentes de esta fracción katarista buscarán modificar desde adentro la composición orgánica de la representación social de la COB, dando lugar a una de las más importantes interpelaciones indígenas a la izquierda obrera.

Una tercera variante discursiva de este movimiento indianista katarista va a ser la vertiente ya estrictamente nacional indígena, enarbolada de manera intui-

Álvaro García Linera

tiva inicialmente por militantes, activistas y teóricos indianistas influidos por Fausto Reinaga⁴⁶⁹, que buscan la constitución de una República India. Se trata de un discurso que no le pide al Estado el derecho a la ciudadanía, sino que pone de manifiesto que deben ser los mismos indígenas quienes deben, porque quieren, ser los gobernantes del Estado. Un Estado que, precisamente por esta presencia india, tendrá que constituirse en otro Estado y en otra república, en la medida en que el Estado Republicano contemporáneo ha sido una estructura de poder levantada sobre la exclusión y exterminio del indígena.

Bajo esta mirada el indígena aparece entonces no sólo como un sujeto político, sino también como un sujeto de poder, de mando, de soberanía. La propia narrativa histórica del indígena que construye este discurso va más allá de la denuncia de las exclusiones, las carencias o los sufrimientos que caracteriza a la reconstrucción culturalista; es una narrativa heroica, hasta cierto punto guerrera, marcada por levantamientos, por resistencias, por aportes, por grandezas cíclicamente reconstruidas de varias formas y que algún día habrá de reestablecerse de manera definitiva mediante la “revolución india”.

En este caso, el indio es concebido como proyecto de poder político y social sustitutivo del régimen republicano de *elites q'aras*, que son consideradas como innecesarias en el modelo de sociedad propugnado. En su etapa inicial, este discurso toma la forma de un panindigenismo, en la medida en que se refiere a una misma identidad india que se extiende a lo largo de todo el continente, con pequeñas variantes regionales. Esta mirada transnacional de la estructura civilizatoria indígena puede considerarse imaginariamente expansiva en la medida en que supera el localismo clásico de la demanda indígena; pero, al mismo tiempo, presenta una debilidad en la medida en que minimiza las propias diferencias intraindígenas y las diferentes estrategias de integración, disolución o resistencia por las que cada nacionalidad indígena optó dentro los múltiples regímenes republicanos instaurados desde el siglo pasado.

De ahí que en una segunda etapa, una corriente del interior de esta vertiente indianista encabezada por Felipe Quispe y la organización Ayllus Rojos⁴⁷⁰ realizan dos nuevos aportes a lo heredado por Reinaga. Por una parte, el reconocimiento de una identidad popular boliviana resultante de los siglos de mutilados

⁴⁶⁹ Reinaga, Fausto 1970 *La revolución india* (La Paz); 1978 *La razón y el indio* (La Paz).

⁴⁷⁰ Quispe, Felipe 1989 *Túpac Katari vive y vuelve, carajo* (La Paz).

Crisis estatal y época de revolución

mestizajes culturales y laborales en diferentes zonas urbanas y rurales. Esto es importante porque en la óptica inicial del indianismo, lo “boliviano” era meramente una invención de una reducidísima elite extranjera, cuyo papel era el de retirarse a sus países de origen europeo. Bajo esta nueva mirada, en cambio, las formas de identidad popular bolivianas, como la obrera, hasta cierto punto la campesina en determinadas regiones, aparecen como sujetos colectivos con los cuales hay que trazar políticas de alianza, acuerdos de mutuo reconocimiento, etc. Éste será el significado político de la llamada teoría de las “dos Bolivias”.

El segundo aporte de este discurso es el de la especificidad de la identidad indígena aimara. Si bien hay un esfuerzo por inscribir en lo indígena múltiples sectores urbanos y rurales, hay una lectura más precisa y efectiva de esta construcción identitaria en torno al mundo aimara, no sólo a partir de la politización del idioma y el territorio, sino también de sus formas organizativas, de su forma diferenciada respecto de los otros pueblos indígenas. De esta forma, el indio aimara aparece de manera nítida como identidad colectiva y como sujeto político encaminado a un destino de autogobierno, de autodeterminación. Ciertamente se trata de una peculiar articulación entre las lecturas de la tradición histórica de las luchas indígenas de autonomía, con las modernas lecturas de autodeterminación de las naciones desarrolladas por el marxismo crítico y cuya importancia radica en que permite centrar el discurso en ámbitos territoriales específicos, en masas poblacionales verificables y en sistemas institucionales de poder y movilización más compactos y efectivos que los de la *panindianidad*. De ahí que se puede afirmar que a partir de esta formación discursiva, el indio y el indianismo devienen en un discurso estrictamente nacional; el de la nación indígena aimara. Estos dos aportes del indianismo como estrategia de poder descenrarán la enemistad de esta corriente ideológica con algunas vertientes del marxismo, dando lugar a un diálogo, ciertamente tenso, entre esta corriente indianista y emergentes corrientes intelectuales marxistas críticas que ayudarán a definir de una manera mucho más precisa la direccionalidad de la lucha y construcción de poder político en esa estrategia indianista.

La cooptación estatal

El segundo período de la construcción del discurso nacional indígena es el de la cooptación estatal. Éste se inicia a fines de los años ochenta, en momentos

Álvaro García Linera

en que se atraviesa por una fuerte frustración política de intelectuales y activistas del movimiento indígena, en la medida en que sus intentos de convertir la fuerza de la masa indígena sindicalizada en votación electoral no dan los resultados esperados. Esto va a dar lugar a una acelerada fragmentación de corrientes aparentemente irreconciliables dentro del movimiento indianista katarista, sin que ninguna de ellas logre articular hegemonícamente al resto. La integración y competencia al interior de las estructuras liberal republicanas de poder (sistema de partidos, delegación de la voluntad política, etc.), marcarán los límites estructurales de la lectura integracionista y pactista del indianismo katarista. También es una época en la que, a la par de una mayor permeabilidad de este discurso en la sociedad, se dan los primeros intentos de reelaboración de estas propuestas por partidos de izquierda e intelectuales bolivianos, pero no con el afán de entender esa propuesta, sino de instrumentalizarla en la búsqueda de apoyo electoral y financiamientos extranjeros.

Al tiempo que la sociedad y los partidos de izquierda marxista asisten al brutal desmoronamiento de la identidad y fuerza de masa obrera sindicalmente organizada, la adopción y reelaboración de un discurso etnicista se les presenta como una opción de recambio en los sujetos susceptibles de ser convocados. De esta manera, la estructura conceptual con la que esta izquierda en decadencia se acerca a la construcción discursiva indígena no recupera el conjunto de la estructura lógica de esa propuesta, lo que hubiera requerido un desmontaje del armazón colonial y vanguardista que caracterizaba al izquierdismo de la época.

Curiosamente, éste también es un momento de confrontación al interior de la CSUTCB entre el discurso étnico campesino katarista e indianista y el discurso izquierdista frugalmente etnicizado. La derrota de Genaro Flores en el congreso de 1988 cerrará un ciclo de hegemonía discursiva del katarismo indianista en la CSUTCB, dando lugar a una larga década de predominio de versiones despolitizadas y culturalistas de la identidad indígena, muchas veces directamente emitidas desde el Estado o las instituciones no gubernamentales. Paralelamente a este repliegue sindical y frustración electoral, una parte de la militancia indianista adoptará posiciones organizativas más radicales formando el Ejército Guerrillero Túpac Katari (EGTK), bajo la propuesta teórica de autogobierno indígena aimara y apuntalamiento de estructuras militarizadas en las comunidades del altiplano, influyendo quince años después en las características organizativas y discursivas de las rebeliones indígenas en el altiplano norte en el siglo XXI.

El MNR es el partido político que con mayor claridad detecta el significado

Crisis estatal y época de revolución

de la formación discursiva de un nacionalismo indígena, visto como un peligro, así como también las debilidades que atravesaba el movimiento indígena. Por medio de la alianza con Víctor Hugo Cárdenas y una serie de intelectuales y de activistas del movimiento indígena, el MNR convierte en política de Estado el reconocimiento retórico de la multiculturalidad del país, mientras que la Ley de Participación Popular habilita mecanismos de ascenso social local capaces de succionar el discurso y la acción de una buena parte de la intelectualidad indígena crecientemente descontenta.

La aplicación de la Ley de Participación Popular, si bien ha contribuido en algunos casos a un notable fortalecimiento de las organizaciones sindicales locales que han logrado proyectarse electoralmente en el ámbito nacional, también puede ser vista como un mecanismo bastante sofisticado de cooptación de líderes y de activistas locales, que comienzan a girar y propugnar sus luchas y sus formas organizativas alrededor de los municipios y las instancias indigenistas expresamente creadas por el Estado. Ello ha de inaugurar un espacio de fragmentación étnica, en la medida en que también fomenta el resurgimiento y la invención de etnicidades indígenas locales, de *ayllus* y asociaciones indígenas separadas entre sí, pero vinculadas verticalmente a una economía de demandas y concesiones en el Estado. De esta manera, a la identidad indígena autónoma y asentada en la estructura organizativa de los “sindicatos”, formada desde los años setenta, se va a contraponer una caleidoscópica fragmentación de identidades de *ayllus*, de municipios y de “etnias”.

Éste será un momento de reacomodo de las fuerzas y corrientes internas del movimiento indígena, de un rápido amansamiento de los discursos de identidad a los parámetros emitidos por el Estado liberal, de desorganización social y de escasa movilización de masas indígenas. A excepción de la gran marcha de 1996 en contra de la ley del INRA, el protagonismo social de las luchas sociales habrá de desplazarse del altiplano aimara a las zonas cocaleras del Chapare donde predominará un discurso de tipo campesino complementado con algunos componentes culturales indígenas.

El indianismo de los noventa

El tercer período de este nuevo ciclo indianista puede ser calificado como estrategia de poder y se da a fines de los años noventa y principios del siglo XXI.

Álvaro García Linera

Es el momento en que el indianismo deja de ser una ideología que resiste en los resquicios de la dominación y se expande como una concepción del mundo proto-hegemónica intentando disputar la capacidad de dirección cultural y política de la sociedad a la ideología neoliberal que había prevalecido durante los últimos dieciocho años. De hecho, hoy se puede decir que la concepción del mundo de corte emancipativo más importante e influyente en la actual vida política del país es el indianismo y es el núcleo discursivo y organizativo de lo que hoy podemos denominar la “nueva izquierda”.

Independientemente de si los actores de esta reconstrucción del eje político contemporáneo aceptan el denominativo de izquierdas como identidad⁴⁷¹, en términos de clasificación sociológica⁴⁷² los movimientos sociales indígenas, en primer lugar, y los partidos políticos generados por ellos, han creado una “relación de antagonismo entre partes contrapuestas” en el universo político, precisamente representable por una dicotomía espacial como lo es “izquierdas y derechas”, lo que no significa que, como antes, sea una identidad, pues, ahora éstas vienen más del lado de la autoadscripción a lo indígena (aimaras y quechuas), a lo originario (naciones ancestrales) o a lo laboral (el “pueblo sencillo y trabajador” de la Coordinadora del Agua de Cochabamba).

La base material de esta colocación histórica del indianismo es la capacidad de sublevación comunitaria con las que las comunidades indígenas responden a un creciente proceso de deterioro y decadencia de las estructuras comunitarias campesinas y de los mecanismos de movilidad social ciudad-campo. Manifiesta ya desde los años setenta, las reformas neoliberales de la economía incidirán de manera dramática en el sistema de precios del intercambio económico urbano rural. Al estancamiento de la productividad agraria tradicional y la apertura de la libre importación de productos, los términos del intercambio regularmente desfavorables para la economía campesina se intensificarán drásticamente⁴⁷³ comprimiendo la capacidad de compra, de ahorro y de consumo de las familias campesinas. A ello, se sumará un mayor estrechamiento del mercado de trabajo urbano y un descenso en el nivel de ingreso de las escasas actividades laborales urbanas con las que periódicamente complementan sus ingresos las familias

⁴⁷¹ El indianismo fuerte nunca aceptó ser calificado como de izquierda pues la izquierda tradicional reproducía los criterios anti-indígenas y colonialistas de las derechas políticas.

⁴⁷² Bobbio, Norberto 1998 *Derecha e izquierda* (Barcelona: Taurus).

⁴⁷³ Pérez, Mamerto 2004 *Apertura comercial y sector agrícola campesino* (La Paz: Cedla).

Crisis estatal y época de revolución

campesinas. Esto restringe la complementariedad laboral urbano rural con la que las familias campesinas diseñan sus estrategias de reproducción colectiva.

Bloqueados los mecanismos de movilidad social internos y externos a las comunidades, con una migración acelerada a las ciudades en los últimos años, pero con una ampliación de la migración de doble residencia de aquellas poblaciones pertenecientes a zonas rurales con condiciones de relativa sostenibilidad productiva (que a la larga serán las zonas de mayor movilización indígena campesina), el punto de inicio de las sublevaciones y de expansión de la ideología indianista se da en el momento en el que las reformas de liberalización de la economía afecten las condiciones básicas de reproducción de las estructuras comunitarias agrarias y semi urbanas (agua y tierra). A diferencia de lo estudiado por Bourdieu en Argelia⁴⁷⁴ donde el deterioro de la sociedad tradicional dio lugar a un subproletariado desorganizado, atrapado en redes clientelares y carente de autonomía política, el deterioro creciente de la estructura económica tradicional de la sociedad rural y urbana ha dado lugar a un fortalecimiento de los lazos comunitarios como mecanismos de seguridad primaria y reproducción colectiva. Es en medio de ello, y del vaciamiento ideológico que esta ausencia de porvenir modernizante provoca, que se ha podido expandir la ideología indianista capaz de brindar una razón del drama colectivo, precisamente a partir de la articulación política de las experiencias cotidianas de exclusión social, discriminación étnica y memoria social comunitaria de campesinos indios dejados a su suerte por un Estado empresario, dedicado exclusivamente a potenciar los diminutos enclaves de modernidad transnacionalizada de la economía. La politización que hará el indianismo de la cultura, del idioma, de la historia y la piel, elementos precisamente utilizados por la “modernidad” urbana para bloquear y legitimar la contracción de los mecanismos de inclusión y movilidad social, serán los componentes palpables de una ideología comunitarista de emancipación que rápidamente erosionará la ideología neoliberal, para entonces cosechadora de frustraciones por la excesiva inflación de ofertas que hizo al momento de consagrarse. Paralelamente, este indianismo cohesionará una fuerza de masa movilizable, insurreccional y electoral, logrando politizar el campo político discursivo y consolidándose como una ideología con proyección estatal.

⁴⁷⁴ Bourdieu, Pierre 1977 *Algérie 60. Structures économiques et structures temporelles* (Paris: Les Editions de Minuit).

Álvaro García Linera

Este indianismo, como estrategia de poder, presenta en la actualidad dos vertientes: una de corte moderada (MAS-IPSP) y otra radical (MIP-CSUTCB). La vertiente moderada es la articulada en torno a los sindicatos campesinos del Chapare enfrentados a las políticas de erradicación de coccaleros. Sobre un discurso campesinista que ha ido adquiriendo connotaciones más étnicas recién en los últimos años, los sindicatos coccaleros han logrado establecer un abanico de alianzas flexibles y plurales en función de un “instrumento político” electoral que ha permitido a los sindicatos, especialmente agrarios, ocupar puestos de gobierno local y una brigada parlamentaria significativa. Reivindicando un proyecto de inclusión de los pueblos indígenas en las estructuras de poder y poniendo mayor énfasis en una postura antiimperialista; esta vertiente puede ser definida como indianista de izquierda por su capacidad de recoger la memoria nacional-popular, marxista y de izquierda formada en las décadas anteriores, lo que le ha permitido una mayor recepción urbana, multisectorial y plurirregional a su convocatoria, haciendo de ella la principal fuerza político parlamentaria de la izquierda y la principal fuerza electoral municipal del país.

Por su parte, la corriente indianista radical tiene más bien un proyecto de indianización total de las estructuras de poder político, con lo que, según sus líderes, los que deberían negociar sus modos de inclusión en el Estado son los “mestizos”, en calidad de minorías incorporadas en condiciones de igualdad política y cultural a las mayorías indígenas. Si bien la temática campesina siempre está en el repertorio discursivo de este indianismo, todos los elementos reivindicativos están ordenados y direccionados por la identidad étnica (“naciones originarias” aimaras y quechuas). Se trata por tanto de una propuesta política que engarza directamente con el núcleo duro del pensamiento indianista del período formativo (Reinaga), y con ello, hereda la crítica a la vieja izquierda marxista, a su cultura que aún influye pasivamente en sectores sociales urbanos mestizos. Por ello, esta corriente se ha consolidado sólo en el mundo estrictamente aimara, urbano rural, por lo que puede ser considerada como un tipo de indianismo nacional aimara.

Pese a sus notables diferencias y enfrentamientos, ambas corrientes comparten trayectorias políticas similares:

a- Tienen como base social organizativa los sindicatos y comunidades agrarias indígenas.

b- Los “partidos” o “instrumentos políticos” parlamentarios resultan de coaliciones negociadas de sindicatos campesinos y, en el caso del MAS, urbano populares, que se unen para acceder a representaciones parlamentarias, con lo que la tríada “sindicato-masa-partido”, tan propia de la antigua izquierda, es

Crisis estatal y época de revolución

dejada de lado por una lectura del “partido” como prolongación parlamentaria del sindicato.

c- Su liderazgo y gran parte de su intelectualidad y plana mayor (en mayor medida en el MIP), son indígenas aimaras o quechuas y productores directos, con lo que la incursión en la política toma la forma de una autorrepresentación de clase y étnica simultáneamente.

d- La identidad étnica, integracionista en unos casos o autodeterminativa en otros, es la base discursiva del proyecto político con el que se enfrentan al Estado e interpelan al resto de la sociedad, incluido el mundo obrero asalariado.

e- Si bien la democracia es un escenario de despliegue de sus reivindicaciones, hay una propuesta de ampliación y complejización de la democracia a partir del ejercicio de lógicas organizativas no liberales y la postulación de un proyecto de poder en torno a un tipo de cogobierno de naciones y pueblos.

Lo que resta saber de este despliegue diverso del pensamiento indianista es si será una concepción del mundo que tome la forma de una concepción dominante de Estado, o si, como parece insinuarse por las debilidades organizativas, errores políticos y fraccionamientos internos de las colectividades que lo reivindican, será una ideología de unos actores políticos que sólo regularán los excesos de una soberanía estatal ejercida por los sujetos políticos y clases sociales que consuetudinariamente han estado en el poder.

Por último, en lo que respecta a la nueva relación entre estos indianismos y el marxismo, a diferencia de lo que sucedía en décadas anteriores, en las que la existencia de un vigoroso movimiento obrero estaba acompañada de una primaria pero extendida cultura marxista, hoy, el vigoroso movimiento social y político indígena no tiene como contraparte una amplia producción intelectual y cultural marxista. El antiguo marxismo de Estado no es significativo ni política ni intelectualmente y el nuevo marxismo crítico, proveniente de una nueva generación intelectual, tiene una influencia reducida y círculos de producción aún limitados. Con todo, no deja de ser significativo que este movimiento cultural y político indianista no venga acompañado de una vigorosa intelectualidad letrada indígena e indianista. Si bien el indianismo actual tiene una creciente intelectualidad práctica en los ámbitos de dirección de sindicatos, comunidades y federaciones agrarias y vecinales, el movimiento carece de una propia intelectualidad letrada y de horizontes más estratégicos. El grupo social indígena que podría haber desempeñado ese papel se halla aún adormecido por el impacto de la cooptación general de cuadros indígenas por el Estado neoliberal en la década del noventa. Y, curiosamente, son precisamente

Álvaro García Linera

parte de estos pequeños núcleos de marxistas críticos los que con mayor acuciosidad reflexiva vienen acompañando, registrando y difundiendo este nuevo ciclo del horizonte indianista, inaugurando así la posibilidad de un espacio de comunicación y enriquecimiento mutuo entre indianismos y marxismos, que serán, probablemente las concepciones emancipativas de la sociedad más importantes en Bolivia en el siglo XXI.

El Estado en transición. Bloque de poder y punto de bifurcación*

Hoy quisiera, con ustedes, reflexionar acerca del Estado en tiempos de transición; qué podemos entender por Estado en momentos en que su forma social está en duda, está en proceso de incertidumbre o, si se prefiere, en momentos en que se construye una nueva estructura estatal. Ciertamente lo que llamamos Estado es una relación o, mejor, una estructura de relaciones políticas territorializadas y, por tanto, son flujos de interrelaciones y de materializaciones pasadas de esas interrelaciones referidas a la dominación y legitimación política. Esta relación-Estado siempre es un proceso histórico político en construcción, en movimiento, en flujo. Pero hay momentos de su historia que este devenir se mueve en un marco de procedimientos, jerarquías y hábitos relativamente previsibles y acotados, esos son los momentos de la “estabilidad” de la relación-Estado. Pero cuando las jerarquías, los procedimientos y los hábitos de la relación-Estado pierden su anclaje estructural primordial, hablamos de los momentos de “transición” de una estructura de relaciones políticas de dominación y legitimación a otra estructura, esto es a otra forma de relación-Estado.

En un diálogo que tuvimos con Emir Sader sobre esta temática, reflexionamos en torno a tres ejes analíticos del concepto de la relación-Estado: el Estado como correlación política de fuerzas sociales, el Estado como institución y el Estado como idea o creencia colectiva generalizada. Yo quisiera recoger este debate, entendiendo al Estado, por una parte, como una correlación política de fuerzas entre bloques y clases sociales con capacidad de influir, en mayor o menor medida, en la implementación de decisiones gubernamentales o, si se prefiere, como construcción de una coalición política dominante; por otra,

* Texto inédito.

Crisis estatal y época de revolución

como una maquinaria donde se materializan esas decisiones en normas, reglas, burocracias, presupuestos, jerarquías, hábitos burocráticos, papeles, trámites, es decir, como institucionalidad. Estos dos primeros componentes hacen referencia al Estado como relación material de *dominación y conducción política*. Finalmente, en tercer lugar, el Estado como idea colectiva, como sentido común de época que garantiza el consentimiento moral entre gobernantes y gobernados. Con este tercer componente nos referimos al Estado como *relación de legitimación política* o, en palabras del profesor Pierre Bourdieu, como *monopolio del poder simbólico*⁴⁷⁵. De ahí que de cierta manera la relación-Estado sea una relación paradójica. Por una parte, no hay nada más material, físico y administrativamente político que un Estado (monopolio de la coerción, de la administración de los impuestos como núcleo íntimo y fundante), pero, a la vez, no hay nada que dependa más de su funcionamiento que la creencia colectiva de la necesidad (momento conciente) o inevitabilidad (momento prerreflexivo) de su funcionamiento. De igual manera, en la administración interna de la maquinaria, el Estado se presenta como la totalidad más idealista de la acción política, ya que es el único lugar en todo el campo político en el que la idea deviene inmediatamente en materia con efecto social general, esto es: es el único lugar donde cualquier decisión pensada, asumida y escrita por los máximos gobernantes, deviene inmediatamente en materia estatal, en documentos, informes, memorias, recursos financieros, ejecuciones prácticas, etc. Por ello es que se puede decir que el Estado es la perpetuación y la constante condensación de la contradicción entre la materialidad y la idealidad de la acción política. Esta contradicción busca ser superada parcialmente mediante la conversión de la idealidad como un momento de la materialidad (la legitimidad como garante de la dominación política) y la materialidad como momento del despliegue de la idealidad (decisiones de gobierno que devienen en acciones de gobierno de efecto social general).

Retomando las características de estos tres componentes estructurales de la relación estatal, intentemos acercarnos ahora a algunos elementos del *Estado en transición* o momentos de revolución política de las sociedades.

Para ello, los textos de Robespierre son reveladores de estos momentos de transformación. También Marx con sus textos sobre la revolución europea de 1848-1850, sobre la Comuna de París en 1871 o Lenin con sus reflexiones en el periodo 1918-1920 y, por supuesto, Zavaleta cuando estudia la Revolución del cincuenta y dos.

⁴⁷⁵ *Cosas dichas*, 1987 (Barcelona: Gedisa).

Álvaro García Linera

En lo que se refiere a los estudios del Estado como *continuidad y reproducción*, hay bastantes aportes en la sociología del Estado. En ello, las investigaciones sobre el proceso de monopolización de la coerción legítima y de los impuestos, de construcción de los sistemas legales y judiciales, del papel del sistema escolar como reproductor de las relaciones de dominación, son líneas de estudio de los largos periodos de regularidad y la reproducción del Estado.

En nuestra eventual estadía en el gobierno, he podido visualizar otros elementos de la regularidad y de la reproducción de la relación de la dominación estatal que pudieran explorarse con mayor detenimiento, como son: las asignaciones de la inversión pública, el papel del Banco Central en el control de los flujos monetarios y de la propia inversión interna, los regímenes de contratación de obras, de contratación de deuda, más aún en tiempos en que el Estado asume cada vez más un protagonismo en la inversión pública. En conjunto, se trata de temáticas que se pueden incorporar al bagaje sociológico del estudio del Estado en tiempos de estabilización o de estabilidad como relación de dominación, como correlación de fuerzas y como idea dominante de la sociedad.

Ahora bien, estas tres dimensiones o caras del mismo orden estatal, en momentos de cambio de forma y contenido social del Estado, presentan transformaciones diferentes en su profundidad y velocidad, dependiendo del momento o etapa de la crisis de Estado que se está atravesando.

Esquemáticamente, podemos resumir que toda crisis estatal atraviesa cuatro etapas históricas.

- a) *El momento del develamiento de la crisis de Estado* que es cuando el sistema político y simbólico dominante que permitía hablar de una tolerancia o hasta acompañamiento moral de los dominados hacia las clases dominantes, se quiebra parcialmente, dando lugar a un bloque social políticamente disidente con capacidad de movilización y expansión territorial de esa disidencia convertida en irreductible.
- b) De consolidarse esa disidencia como proyecto político nacional imposible de ser incorporado en el orden y discurso dominante, se da inicio al *empate catastrófico*, que habla ya de la presencia no sólo de una fuerza política con capacidad de movilización nacional como para disputar parcialmente el control territorial del bloque político dominante, sino además, de la existencia de una propuesta de poder (programa, liderazgo y organización con voluntad de poder estatal), capaz de desdoblar el imaginario

Crisis estatal y época de revolución

colectivo de la sociedad en dos estructuras políticas-estatales diferenciadas y antagonizadas.

c) *Renovación o sustitución radical de elites políticas* mediante la constitución gubernamental de un nuevo bloque político que asume la responsabilidad de convertir las demandas contestatarias en hechos estatales desde el gobierno.

d) *Construcción, reconversión o restitución conflictiva* de un bloque de poder económico-político-simbólico desde o a partir del Estado, en la búsqueda de ensamblar el ideario de la sociedad movilizada con la utilización de recursos materiales del o desde el Estado.

e) *Punto de bifurcación* o hecho político-histórico a partir del cual la crisis de Estado, la pugna política generadora de desorden social creciente, es resuelta mediante una serie de hechos de fuerza que consolidan duraderamente un nuevo, o reconstituyen el viejo, sistema político (correlación de fuerzas parlamentarias, alianzas y procedimientos de recambio de gobierno), el bloque de poder dominante (estructura de propiedad y control del excedente) y el orden simbólico del poder estatal (ideas fuerza que guían las temáticas de la vida colectiva de la sociedad).

En el caso de Bolivia, la crisis estatal se manifestó desde el año 2000 con la “Guerra del agua” que al tiempo de revertir una política estatal de privatización de recursos públicos, permitió reconstituir núcleos territoriales de un nuevo bloque nacional-popular. El empate catastrófico se visibilizó desde el año 2003, cuando a la expansión territorial de este bloque social movilizadose sumó la construcción polimorfa de un programa de transformaciones estructurales a la cabeza de los movimientos sociales constituidos, desde entonces, en una voluntad de poder estatal movilizadase. La sustitución de elites gubernamentales se dio en enero del 2006, con la elección del primer Presidente indígena de la historia republicana, en un país de mayorías indígenas, en tanto que la construcción del nuevo bloque de poder económico y el nuevo orden de redistribución de los recursos se vendrá dando lugar hasta el día de hoy. El punto de bifurcación se habría iniciado de manera gradual y concéntrica desde la aprobación del nuevo texto constitucional por parte de la Asamblea Constituyente y tiene en el referéndum de agosto del 2008 un momento de su despliegue sin que se pueda establecer de manera precisa el momento final de su realización plena.

Álvaro García Linera

Tomando en cuenta esta periodización, vamos a detenernos en las características del Estado en transición en estas dos últimas etapas.

Ahora bien, ¿cuáles son los puntos nodales de la estatalidad cuando queremos ver al Estado en tiempos de transición? En otras palabras: ¿cómo acercarnos al estudio de los mecanismos, las formas y los medios de consagración y legitimación duradera de una correlación de fuerzas políticas?, ¿cómo se convierte en estable una eventual estructura de relaciones políticas diferente a la anteriormente vigente?, ¿cómo -usando palabras más académicas- se consolida un régimen de mando y de poder social tanto material como simbólicamente?

Es claro que en los momentos de estabilidad política y de estabilidad estatal esos tres componentes que hemos nombrado: el Estado como correlación de fuerzas, el Estado como máquina, el Estado como idea, se definen como *estables* porque se mueven en un ámbito de previsibilidad y de no antagonismo radical ni de quiebre en sus componentes internos. Por lo tanto, su preservación, su transformación y su reconversión, que son también flujos de trabajo de poder, son, en cierta medida, previsibles a partir de ciertos parámetros de movimiento interno de las ideas dominantes, de la maquinabilidad administrativa y de la correlación de fuerzas sociales.

En cambio, en tiempo de crisis estatal, está claro que cada uno de estos componentes (la máquina, la correlación de fuerzas y la idea o la imaginación política) presentan ámbitos de antagonismo recurrente, de inestabilidad y de incertidumbre estratégica en cuanto a su funcionamiento. En otras palabras, la forma cotidiana de reconocer a un Estado en transición es la incertidumbre duradera de la vida política de una sociedad, la gelatinocidad conflictiva y polarizada del sentido común colectivo, la imprevisibilidad estratégica de las jerarquías y mandos de la sociedad a largo plazo que bien podemos denominar “crisis de Estado”. Hoy Bolivia, desde hace 8 años, es un laboratorio viviente precisamente de este momento histórico de transformación acelerada y antagonizada de una *forma estatal* a otra.

Para acercarse al estudio de este momento político de crisis estatal y en proceso de resolución probable, algunas preguntas pueden ayudar a precisar el problema.

Primero: ¿cuál es la coalición social que ha conquistado el poder político en la sociedad boliviana a raíz de las elecciones generales del 2005?, ¿cuál la diferencia clasista regional y étnica con el antiguo bloque de poder?, ¿cuáles son las características, las medidas y estrategias de expansión de la nueva base material que sustenta al nuevo bloque de poder?

Crisis estatal y época de revolución

En segundo lugar: ¿Cuáles son los actuales mecanismos de estabilización del poder y de mando político del Estado? Si en los momentos de estabilidad de la reproducción de las relaciones de dominación, el régimen judicial, el sistema escolar, el congreso, la relación salarial, etc. son los mecanismos decisivos de la continuidad de la correlación de fuerzas sociales; en momento de crisis estatal, ¿cuáles son los mecanismos de reproducción y ampliación de la nueva correlación de fuerzas emergente de la insurgencia social, la movilización colectiva y las elecciones?

Y, por último, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad de la presencia del momento histórico de lo que denominaremos “*punto de bifurcación estatal*” a partir del que ya es posible hablar de un proceso de estabilización y de auto reproducción de la correlación de fuerzas y, por tanto, de cierre de la crisis de Estado? Es evidente que la llegada a la estabilización estratégica del sistema estatal es un proceso, pero hay un momento, el *punto de bifurcación política*, en que se verifica un proceso de retroalimentación duradera de la correlación de fuerzas, de las ideas-fuerza dominantes y de la maquinabilidad administrativa que expresa la correlación de fuerzas. Es decir, lo que interesa indagar son las relaciones del Estado en construcción de su *forma histórica*, no tanto del Estado en su reproducción y en su estabilización.

Provisionalmente intentaré mencionar algunas ideas al respecto de estos momentos de transición estatal.

En lo que se refiere al primer punto de la nueva coalición dominante con poder del Estado, está claro que en Bolivia ha habido una modificación de las clases sociales y de sus identidades étnicas culturales, que han asumido, primero, el control del gobierno y, gradualmente, la modificación del poder político, el control del excedente económico y de la estructura del Estado. Esto es verificable a partir del origen social, trayectoria laboral y educativa y estructura de los capitales (económicos, culturales y simbólicos) de los actuales gobernantes, que permiten hablar no sólo de una clásica renovación de elites del poder del Estado, sino fundamentalmente de un desplazamiento radical de las elites del gobierno y de las propias clases sociales que toman las decisiones políticas fundamentales, que filtran la selección de la administración burocrática y que son objeto de mayor cercanía en las políticas de distribución de la riqueza pública. Tan radical ha sido este trastocamiento de la condición de clase y procedencia étnica de las coaliciones gobernantes, que los puentes de comunicación que antiguamente

Álvaro García Linera

servían para llevar adelante transiciones estatales más dialogadas (similares colegios y universidades de los hijos de las elites, estilos de vida compartidos, alianzas matrimoniales cruzadas, negocios articulados, lugares de residencia geográficamente similares, etc.), hoy no existen, acentuando las diferencias y tensiones entre el bloque político ascendente y el decadente. En buena medida, esto ayuda a entender también el grado de beligerancia permanente de la sociedad en esta etapa de gobierno del presidente Evo Morales, pues los tradicionales puentes cotidianos de asimilación de las nuevas elites emergentes y de reacomodo de las antiguas, que caracterizaron las transiciones estatales precedentes (1952-1957; 1982-1988), hoy no existen ni se los construye, con lo que la modificación de la composición clasista y cultural de los sectores dirigentes es abrupta, sin mediaciones ni aligeramientos.

¿Cuáles son las características de este nuevo bloque de poder dominante? Está claro que su base material económica la constituye la pequeña producción mercantil tanto agraria como urbana, la misma que caracterizó a la multitud movilizada en las grandes rebeliones sociales semi-insurreccionales del 2000 al 2003. En ese bloque dirigente destacan campesinos indígenas con vínculos regulares con el mercado (el Chapare, valles cochabambinos, zonas de colonización en el oriente, comunarios del altiplano paceño, orureño, chukuisaqueño y potosino, valles tarijeños), indígenas campesinos de tierras bajas y de los ayllus andinos. También pequeños productores urbanos y sectores de actividad mercantil relativamente avanzada, entre los que se puede hablar de la presencia de un tipo de “empresariado de origen popular” que auto identificado más como trabajador que como burguesía y sin haber recibido nada del Estado para llegar a donde está, abastece el mercado interno y, en parte, a mercados externos.

En este primer círculo de decisión hay que ubicar también a una nueva *intelligentzia* urbana, a un bloque de profesionales e intelectuales producto del ingreso de las clases populares al sistema universitario desde los años 70 y que, a diferencia de la intelectualidad pequeño burguesa tradicional de los años 60 que se inclinó por construcciones partidarias de izquierda, es más afín a las estructuras corporativas del sindicalismo urbano, rural y al movimiento vecinal. En medio de ellos se destaca una *intelligentzia* indígena letrada que ha ido construyendo en los últimos 30 años un horizonte utópico indianista

Es claro también que es posible ver que, en torno a este núcleo, se han articulado distintas personalidades, fuerzas obreras anteriormente sometidas a políticas

Crisis estatal y época de revolución

de precarización laboral, y con ellos, visiblemente un segmento empresarial industrial tradicional, una parte del cual está vinculado al mercado interno y que hoy se ve favorecido por una serie de decisiones que fomentan el consumo público de productos nacionales.

A este bloque social le acompaña y se construye simultáneamente, lo que podríamos denominar una nueva burocracia estatal que es una especie de síntesis de antiguos funcionarios del Estado, en niveles intermedios, y nuevos funcionarios del Estado que poseen no sólo un capital escolar diferente, sino que además han utilizado unas redes sociales para acercarse a los puestos administrativos, étnica y clasistamente diferentes a los de la burocracia tradicional. Claro, durante toda la etapa del Estado neoliberal, los niveles intermedios del aparato de Estado reclutaron preponderantemente a profesionales provenientes de universidades privadas, extranjeras y formados en el ámbito de los negocios, el marketing, la gestión empresarial, etc., y que llegaron al Estado a partir de la activación de vínculos familiares y compromisos partidarios. La nueva burocracia, en cambio, proviene de las universidades públicas, de profesiones técnicas o sociales, en tanto que el tipo de vínculos que ha mejorado su acercamiento a la administración pública ha sido el de las redes sindicales que cumplen una especie de filtro en el reclutamiento de ciertos niveles intermedios de la burocracia estatal.

En ese sentido, se puede decir que el nuevo bloque de poder ha ido creando tres mecanismos de conducción del Estado, de cierto modo complementarios: por una parte, mediante la presencia directa de las organizaciones sociales en la definición de las principales políticas públicas que son formuladas en amplios y congresos, y que son la base de las acciones de gobierno que impulsa tanto la Presidencia como la bancada mayoritaria del Congreso. En segundo lugar, por medio de la presencia directa de representantes de los sectores sociales moviliados en distintos niveles del aparato estatal (Presidencia, ministerios, direcciones, Parlamento, constituyente). Por último, a través de la lenta promoción de una nueva intelectualidad en funcionarios públicos vinculados a las expectativas y necesidades de este bloque de productores.

En ese sentido, hay nuevas clases sociales, políticamente visibilizadas a partir de nuevas identidades étnicas, culturales y regionales, en el control de los principales mecanismos de decisión estatal y hay una sustitución y ampliación de las elites administrativas del Estado. Lo relevante de este proceso de modificación de la composición social del bloque en el poder del Estado y de los niveles superiores de la administración pública, radica en que étnica y clasista-

Álvaro García Linera

mente las distancias sociales con el antiguo bloque de poder estatal son enormes. Lo que está aconteciendo hoy en Bolivia no es, por tanto, una simple mutación de elites en el poder, sino una auténtica sustitución de la composición de clase del poder del Estado, cuya radicalidad es directamente proporcional a la distancia de clase y, en particular, cultural entre el bloque social emergente y el bloque social desplazado.

Hoy, entre el presidente Evo Morales, el Canciller o la presidenta de la Asamblea Constituyente, poco o nada, no sólo de sus propuestas políticas sino de su vida cotidiana, tienen en común con los ex presidentes ministros y grupos influyentes del antiguo bloque de poder en decadencia. Quizás esto también ayuda a explicar los escasos puentes de comunicación entre ambos bloques, pues a diferencia de lo que sucedía antes cuando a pesar de las diferencias políticas, las elites confrontadas compartían un mismo estilo de vida, redes matrimoniales, espacios familiares de educación y distracción, las clases sociales hoy confrontadas pertenecen a ubicaciones en el espacio social material y objetivamente antagónicas y con unas distancias geográficas reales que no hacen más que materializar y ahondar sus distancias políticas.

Es el Congreso, pero fundamentalmente en la estructura de la división territorial del Estado, donde se visibilizan y personifican esas diferencias. El antiguo bloque social dominante es hoy fuerza política minoritaria y beligerante del Parlamento. En tanto que inaugurando la elección de prefectos y la oposición política de este nivel subnacional, los representantes históricos del viejo régimen (prefectos de Pando, Tarija, Cochabamba) o formados en él (prefectos de Santa Cruz y Beni), se han replegado al ámbito de los gobiernos departamentales, dando lugar a una segmentación territorial vertical diferenciada de las elites estatales. De esta manera, el bloque de poder del viejo Estado, carente de un nuevo proyecto político general, se ha replegado al control de varios gobiernos regionales, en tanto que las clases sociales regionalmente movilizadas durante los últimos ocho años, hoy se están constituyendo en nuevo bloque de poder nacional general dirigente

Estamos, por tanto, ante un nuevo sistema político donde se están reconfigurando cinco aspectos: las características clasistas y culturales del nuevo bloque de poder estatal, las nuevas fuerzas políticas duraderas en el país, los nuevos liderazgos generacionales, la distribución territorial del poder estatal y, por supuesto, el nuevo sistema de ideas antagonizables a corto y a mediano plazo.

Esos puntos nos hablan, entonces, de una estructura de poder y de mando que tiene actores relativamente definibles, pero donde sus ámbitos de irradia-

Crisis estatal y época de revolución

ción, de alianzas y de propia estabilidad, presentan elementos de incertidumbre, tanto entre los que están en el mando político del Estado como entre los que están en la oposición.

¿Hasta cuándo durará este repliegue regional y carencia de voluntad de poder general de estas elites conservadoras en proceso de mutación discursiva? ¿Quién será el líder de la oposición con potencialidad de futura proyección nacional? ¿Será Branco Marinkovic, será Jorge Quiroga, será Carlos Mesa? ¿Cuál será el centro político? ¿Será el MNR (Movimiento Nacionalista Revolucionario) renacido o será UN (Unidad Nacional)? El propio sistema político presenta un conjunto de modificaciones internas no estables. Incluso el bloque dominante, hoy dirigente del proceso político, también presenta un conjunto de tendencias internas que le dan vitalidad y fuerza en términos de cuál será la orientación prevaleciente en la compleja tensión entre estatismo, más ligado a la monopolización de decisiones, o al comunitarismo, más vinculado a la democracia de los movimientos sociales, etcétera.

Estudiar con más detenimiento este flujo de la construcción de los bloques de poder hoy en Bolivia es, sin duda, un elemento muy importante, no solamente porque sociológicamente da un vistazo de la correlación de fuerzas, sino porque eso mismo da lugar a una visibilización de las tendencias de las fuerzas, de los posibles resultados y las posibles alianzas en corto plazo, en la medida en que son procesos políticos comprimidos.

Mecanismos de estabilización del poder y de mando

En lo que se refiere al segundo punto: los mecanismos de estabilización del poder y mando en momento de *crisis estatal* en proceso de resolución, es posible mencionar tres aspectos.

Paradójicamente, un ámbito importante de estabilización temporal del nuevo bloque de poder ha sido la firmeza y la fidelidad de las estructuras de coerción del Estado (Fuerzas Armadas y Policía Nacional). Acá se halla una explicación sociológica: en la medida en que el Estado tiene como núcleo fundamental los ámbitos de coerción, éstos son los que más inmediatamente también reclaman un nivel de previsibilidad y de certidumbre que garantice la perdurabilidad del núcleo estatal primario. Por lo tanto, después de seis años de inestabilidad estructural (2000-2006) y de fisuras internas al interior del núcleo coercitivo (2003),

Álvaro García Linera

de manera formal, ha habido una adhesión rápida de las estructuras de coerción a la nueva correlación de fuerzas del Estado alcanzada con la contundente victoria electoral del 54 por ciento de los votos del país.

Pero lo que más ha contribuido a este apoyo de las fuerzas de coerción legítima, ha sido que el actual gobierno ha definido de manera rápida un objetivo, un norte estratégico en lo que se refiere al papel de las Fuerzas Armadas en democracia, cosa que no había sucedido antes.

Desde 1982, cuando se recuperan las libertades democráticas, las Fuerzas Armadas fueron abandonadas en una especie de crisis existencial institucional en lo referido a su función en tiempos de democracia. Si ya no eran los centros de reclutamiento de futuros gobernantes ni garantes de una soberanía que era ofertada por los neoliberales en los mercados internacionales de capital, lo que quedaba era una caprichosa manipulación política de los mandos militares a fin de tapar los errores gubernamentales de las elites políticas.

Educadas y formadas en la defensa de la soberanía de la patria, en la defensa de la sociedad y habiendo cosechado sus mayores reconocimientos históricos en el fortalecimiento del Estado, las fuerzas de coerción legítima tuvieron que ver cómo fue que la soberanía se reducía al valor de un “comino” (Jaime Paz); la defensa de la sociedad se transformaba en un ataque armado sistemático a la sociedad (2000, 2003); y el poderío del Estado se derrumbaba frente a las privatizaciones de empresas que ellos mismos habían ayudado a crear (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos [YPFB], Corporación Boliviana de Cemento, etc.).

Así, cuando el presidente Evo Morales asume el mando del gobierno reconstruyendo la presencia del Estado en la economía y ampliando la base de los derechos sociales, relanza ámbitos de soberanía y ciudadanía en el marco de una estructura interestatal global más complejizada e incorpora en la ejecución de esta expansión estatal a las Fuerzas Armadas, lo que tiene resonancia con la historia de fortalecimientos del Estado nacional impulsados por las Fuerzas Armadas décadas atrás. Esto va a dar lugar a un extraordinario ensamble entre fuerzas sociales indígenas-campesinas-populares y Fuerzas Armadas que, a diferencia de lo que se intentó décadas atrás bajo tutelaje militar, ahora tendrá el liderazgo moral e intelectual de sectores indígenas populares. De esta manera, la nacionalización de empresas y el control del excedente económico por el Estado le dan una base técnico-material a la soberanía relativa del Estado y, por tanto, a su estabilización que es el principio organizador de cualquier

Crisis estatal y época de revolución

Fuerza Armada. Y si a ello se suma la participación de las Fuerzas Armadas en la construcción de carreteras, distribución del excedente (Renta Dignidad y Bono “Juancito Pinto”) y el control real de territorios fronterizos anteriormente sometidos al poder de caciques y mafias locales, estamos ante una estrategia de renovada expansión territorial de la presencia del Estado a través de su estructura coercitiva.

De cierta forma, se puede decir que una parte de la actual capacidad de resistencia del nuevo proyecto estatal emergente a las presiones conspirativas de fuerzas políticas conservadoras externas e internas, se debe precisamente a este ensamblaje histórico entre lo indígena-popular y lo militar que, a diferencia de lo que sucedía décadas atrás, tiene como liderazgo organizador a los propios indígenas.

En qué medida el nuevo liderazgo político tiene la capacidad de convertir esta adhesión inicial en una cohesión estructural, real y duradera, dependerá de la rapidez para interiorizar los nuevos roles militares de carácter desarrollista en la doctrina y espíritu de cuerpo estatal de las Fuerzas Armadas mediante un proceso interno de reformas institucionales.

Esto daría a la nueva estructura estatal, la solidez de un primer núcleo de consolidación, no el fundamental pero sí un nivel importante. Sin embargo, hay experiencias históricas que también revelan que los niveles de coerción y de fidelidad pueden mostrar fisuras en momentos de tensionamiento de la correlación de fuerzas. En todo caso, el síndrome de Allende es algo que uno tiene que recordar siempre.

Un segundo momento de consolidación del poder y del mando del Estado en crisis es, sin duda, el ejercicio del poder ejecutivo, del “Poder Ejecutivo”, fundamentalmente a partir de sus resortes de inversión pública. Es, quizás, en ello y en sus resultados y efectos, donde es posible encontrar los mecanismos de mayor incidencia inmediata del nuevo bloque de poder en la estructura económica y social, y los mecanismos de construcción más estables de la nueva situación económica a futuro.

Cuando una sociedad pasa a controlar de uno a tres dólares de cada cuatro que genera la principal fuente de exportaciones del país, en este caso los hidrocarburos, estamos, primero, ante una modificación en los mecanismos de control y apropiación del excedente y, con ello, de la estructura económica de poder de la sociedad.

Esto es justamente lo que ha sucedido con los decretos de nacionalización del 1 de mayo del 2006, del 2008 y la firma de los contratos de producción con las

Álvaro García Linera

empresas extranjeras. De manera inmediata, los ingresos del Estado han pasado de cerca de 600 millones de dólares retenidos anteriormente por éste en 2005, a poco más de 1.900 millones de dólares en 2007. Y dado que la totalidad del sector hidrocarburífero participa con algo más del 20 por ciento de las exportaciones nacionales, está claro que estamos ante una sustancial retención nacional/estatal del excedente económico que modifica estructuralmente la relación de la sociedad boliviana con el capital global.

De hecho, la modificación del control y propiedad de la industria hidrocarburífera en el país ha cambiado drásticamente la situación económica. Por primera vez en décadas, el país tiene superávit, lo que le permite financiar la administración y las políticas de inversión con capital propio, dejando de lado el conjunto de sujeciones que anteriormente subordinaban las políticas públicas a las exigencias de los organismos internacionales (FMI, Banco Mundial, etc.).

A diferencia de lo que ocurrió en todo el periodo neoliberal, en estos dos últimos años, la principal fuente de inversión en el país ha sido el Estado que ha duplicado su presencia, pasando de 550 millones de dólares en 2005 a 1.100 millones de dólares en 2007 y aproximadamente, a más de 1.600 en 2008, lo que está permitiendo cumplir programas sociales vitales para reducir la pobreza y también cumplir una política expansiva de inversión productiva que permita crear una base industrial mínima para un crecimiento económico sostenible.

Hoy, con la inversión estatal se está comenzando a industrializar el gas (planta de GLP en Campo Grande, planta separadora de gas en el Chaco, Termoeléctrica en el Chapare), se están relanzando actividades mineras metalúrgicas (Huanuni, Vinto, Coro Coro, colas y desmontes, etc.), se está apoyando a los pequeños productores vinculados al mercado interno a través de la Empresa Estatal de Apoyo a la Producción Agrícola (EMAPA) a fin de garantizar la soberanía alimentaria del país, y se están creando fábricas para abastecer el mercado interno (de papel, cartón y otros). La inversión extranjera que fue la protagonista de las inversiones en los años 1998-2001, ahora, si bien ha mejorado su desempeño respecto de la caída del 2005, ya no es la locomotora en la inyección de capital a la economía. El Estado hoy es el principal “empresario colectivo” pasando a participar del 0,8 por ciento de la generación productiva de riqueza en 2005, al 7 por ciento en 2007; en tanto que su participación en la totalidad del PIB ha subido de 15 por ciento al 22 por ciento en tan sólo dos años. Ello traerá una mayor generación de valor, un mayor volumen de excedente económico en manos del Estado y una mayor capacidad de autodeterminación sobre

Crisis estatal y época de revolución

los modos de articular el desarrollo interno de los bolivianos con el desarrollo de la economía mundial.

Pero esta modificación de la capacidad de acción del país en el contexto global no hubiera sido posible sin una transformación simultánea de la estructura del poder económico nacional y de los bloques dirigentes de esa estructura económica. Claro, los procesos de privatización en Bolivia vinieron de la mano de la consolidación de un bloque de poder económico dirigido por las empresas petroleras, los empresarios mineros, los agros exportadores y banqueros que se encargaron de transferir los monopolios y excedentes públicos al dispendio de unas pocas empresas privadas. En esto, el Estado fue mutilado en sus capacidades de acumulación productiva y el resto de los sectores laborales vinculados al mercado externo llevados a la marginalidad.

La precomposición de la *autodeterminación económica del Estado* en cambio lo que ha hecho es internalizar y redireccionar el uso del excedente económico a favor de los actores productivos nacionales, configurando un nuevo bloque de poder económico.

En términos de correlaciones de fuerzas en el campo económico, el poder del capital externo se ha debilitado abruptamente en áreas estratégicas (hidrocarburos, telecomunicaciones) perdiendo flujos financieros, activos y excedentes. En otros casos, el capital extranjero ha perdido el control monopólico de los precios (soya, aceite). En tanto que los sectores del capital comercial y de servicios local adheridos al capital externo que formaban parte de las elites empresariales intermediarias, hoy ya no cuenta con las anuales transferencias de recursos públicos que más bien están siendo dirigidos a apoyar a pequeños y medianos productores urbanos y agrícolas (Banco de Desarrollo Productivo [BDP], para pequeños productores artesanales e industriales, EMAPA, con créditos para pequeños agricultores)

La nueva estructura de poder económica que se está construyendo de manera acelerada tiene al Estado como el principal inversionista y acumulador de excedentes económicos. Actualmente el Estado ha pasado de generar el 0,6 por ciento del valor agregado nacional a más del ocho por ciento y se proyecta llegar hasta 15 por ciento en los siguientes años. Posee la principal empresa productiva del país que controla el principal producto de exportación: YPFB. Esta posición privilegiada en la producción y control del excedente económico nacional, está permitiendo al Estado desplegar una estrategia de alianzas productivas con la inmensa mayoría de productores

Álvaro García Linera

pequeños y medianos de la ciudad y el campo, hacia donde se están transfiriendo rápidamente tecnología, créditos, insumos y mercados (vía BDP, 160 millones de dólares; vía EMAPA más de 150 millones de dólares entre el 2007-2008). De esta forma, esta apuesta estratégica de fortalecimiento de la producción para el mercado interno y de internalización estatal del excedente económico generado con las ventas al mercado externo, está permitiendo consolidar un bloque de poder estatal entre productores medianos y pequeños y Estado que controla cerca del 58 por ciento del PIB, lo que permite hablar de un bloque con suficiente materialidad económica como para encauzar las decisiones económicas de la sociedad.

En términos estrictos, se puede decir que al descomponerse la fuerza económica del bloque monopólico de poder hidrocarburífero y al estar crecientemente penetradas por la presencia del Estado las actividades mineras y agroindustriales que también generan porciones importantes del excedente (minería 1.100 millones de dólares en 2007; agroindustria 550 millones), la actual estructura de poder económico liderizada por el Estado productor, tiene en la composición social indígena-popular y de clase media letrada de la administración estatal, a la fracción social con mayor capacidad de control, no de propiedad, pero sí de recursos económicos del país. Ellos, junto con los propietarios-productores pequeños y medianos manufactureros y agrícolas, constituyen el comando económico de la sociedad contemporánea. Los primeros en tanto detentadores del uso del excedente; los otros en tanto propietarios-productores.

Esto marca un punto de diferenciación plena de la experiencia revolucionaria de 1952. En ese momento, la elite dirigenal del estado, exclusivamente clase media letrada, asumió la modernización de la economía como obra exclusiva del Estado, hacia donde se reinvertieron los excedentes mineros, dando lugar a la Corporación Boliviana de Fomento y otras iniciativas de creación de capitalismo estatal en todos los rubros posibles en torno a un único nodo de acumulación. Ya en su etapa de declinación (1970-1980), la burocracia estatal comenzó a transferir excedentes y activos a la minería mediana y a la agroindustria, pero en momentos en que estas esferas productivas estaban siendo controladas por el capital externo, lo que acabó de consolidar una burguesía intermediaria. Hoy, al tiempo que el Estado controla el excedente económico y lo reinvierte productivamente, promueve la inversión externa bajo condiciones de control estatal de esos flujos y réditos, a la vez que promueve tempranos procesos de

Crisis estatal y época de revolución

modernización y acumulación en los sectores pequeños y medianos de la producción urbana y rural, lo que en conjunto da un despliegue simultáneo de varios nodos de acumulación económica, de reinversión y expansión en torno al liderazgo general del Estado.

En este sentido se puede decir que la transformación en las estructuras de poder económico de la sociedad han avanzado con una rapidez mucho mayor que la reconfiguración de las estructuras de poder político del Estado, en especial de las estructuras territoriales del poder político.

La consolidación formal de un nuevo horizonte estratégico en el desempeño de las instituciones de coerción legítimas del Estado y la construcción rápida de una nueva estructura del poder económico de la sociedad boliviana, tiene sin embargo un conjunto de lastres al interior del Estado que relentizan la consolidación definitiva de la nueva composición estatal. Uno de estos obstáculos internos es sin duda el sistema judicial.

Aún en poder de las antiguas fuerzas conservadoras, el poder judicial es, con mucho, la síntesis suprema de la corrupción como norma institucionalizada y del dogmatismo neoliberal como lógica discursiva, lo que permite todavía la persistencia y reproducción de núcleos conservadores en el Estado.

Pero también, al interior del gobierno, es posible hallar espacios de continuidad de los hábitos de la vieja burocracia estatal. Carente de recursos económicos para inversión pública por los procesos de privatización, la administración estatal se acostumbró a crear una infinidad de procedimientos que dilatan y anulan por cansancio la realización de obras públicas. Hoy, cuando el liderazgo de la inversión está en el Estado, la herencia de las trabas y la mentalidad dilatoria de niveles intermedios de la función pública retrasa la expansión de la nueva dinámica expansiva del nuevo *Modelo Económico Nacional Productivo*. De ahí que, de hecho, todas las decisiones productivistas que tiene el gobierno actual son de iniciativa presidencial y que una buena parte del trabajo presidencial ministerial radique en destrabar y remontar acciones y procedimientos ministeriales contruidos para no construir nada que no sea la existencia autorreferida de la propia burocracia estatal.

Otros elementos que dificultan la consolidación del nuevo Estado son las rutinas y esquemas de transmisión de conocimientos del sistema escolar, además de las estrategias matrimoniales.

Fue el profesor Pierre Bourdieu quien estudio el papel de las estrategias matrimoniales en la reproducción del orden social en sociedades precapita-

Álvaro García Linera

listas o semicapitalistas, como él las llama⁴⁷⁶. En el caso de Bolivia, las estrategias matrimoniales siempre han jugado un papel muy importante en la consolidación y anclaje del bloque de poder dominante. Uno puede estudiar, a lo largo del siglo XX, los mecanismos de reproducción de las élites a partir de distintas estrategias de circulación de esposas y esposos entre específicas redes familiares dominantes.

Pero está claro que hoy esto se ha roto plenamente y es muy difícil todavía encontrar los puentes de continuidad entre las antiguas y las nuevas élites mediante dichas estrategias, porque parecen dos mundos que no tienen vínculos fluidos de comunicación. Dos años y medio no son todavía útiles para un escenario que vaya definiendo estrategias matrimoniales de reproducción de la nueva élite y de las nuevas clases en el poder, pero sí es un escenario de reproducción de las estrategias conservadoras de las élites desplazadas temporalmente del poder.

El tercer elemento donde uno puede ir a rastrear los mecanismos de estabilización del poder y del mando en tiempos de crisis, es el sentido común de la época, las ideas fuerza ordenadoras de la acción social cotidiana. No sin flujos y reflujos y pese a la adversidad de un sistemático flujo ideológico conservador emitido desde los medios de comunicación de masas bajo propiedad de las antiguas clases dominantes, los temas de descolonización, del pluralismo cultural, estatismo productivo, democratización social de la política y desconcentración territorial del poder se han convertido en sentido común ordenador del campo político nacional, lo que habla de una victoria simbólica de las fuerzas del cambio o, si se prefiere, la base de un liderazgo moral e intelectual por parte de las fuerzas socioeconómicas emergentes.

Hoy no se puede hacer política sin una ubicación prepositiva en torno a esos ejes ordenadores. Lo que se debate y distingue polaridades en el campo político no son los temas, sino los modos y velocidades de abordarlos: ¿pluriculturalidad en su forma más avanzada? ¿plurinacionalidad en su forma más conservadora? ¿pluriculturalidad y multilingüismo? El reconocimiento de la diversidad del Estado, Estado productor y Estado descentralizado, estos son tres ejes prevalentes de sentido común de la época. Y no importa si uno está en el gobierno o si está en la oposición, de alguna u otra manera tiene que referirse a los tres componentes o simular que los asume.

⁴⁷⁶ *El baile de los solteros*, 2005 (Barcelona: Anagrama).

Crisis estatal y época de revolución

Por supuesto que existen las contrapartes radicalizadas de la exacerbación del racismo. Lo hemos visto en Sucre, también en Santa Cruz, donde algunos pequeños sectores, que ya pueden dar lugar a hablar de la existencia de grupos semi fascistas por su ideología o proceder antidemocrático, intentan construir un contradiscurso hegemónico. Sin embargo, pese a ello y a que la batalla por la conducción ideológica duradera de la sociedad no está resuelta, se puede decir que hay una mayor correspondencia entre la transformación en el ámbito del poder económico con la transformación en el ámbito del poder simbólico. No sucede lo mismo con las luchas dentro del campo político, donde la estructura de fuerzas aún preserva las cualidades del momento del “*empate catastrófico*” de años atrás.

En síntesis, podemos decir que la transición estatal se presenta como un flujo de marchas y contramarchas flexibles e interdependientes que afectan las estructuras de poder económico (como propiedad y control del excedente), la correlación de fuerzas políticas (como representación parlamentaria, como fuerza de movilización social, como liderazgo y como hábito administrativo) y la correlación de fuerzas simbólicas (como ideas ordenadoras y reguladoras de la vida en común). La transición estatal habla de la construcción de una nueva correlación de fuerzas o bloque dominante en el control de la toma de decisiones político-económicas del país; pero a la vez, de la persistencia y continuidad de antiguas prácticas, de antiguos núcleos de poder interno que reproducen aún partes del viejo Estado buscando reconstituirlo desde adentro.

De la misma manera, la transición estatal hace referencia a la existencia de centros de mando y decisión que concentran la iniciativa y vigor del nuevo orden estatal (inversión pública, sentido común estatista-productivista), como también de nodos de resistencia conservadora que pugnan por la restitución del viejo orden.

Y dentro de esa pugna en flujo, está claro que la nueva estructura estatal ha podido avanzar más rápidamente en la construcción de un nuevo bloque de poder económico y en la formación de un núcleo discursivo simbólico. En tanto que la arquitectura del sistema político aún es objeto de una intensa pugna por la definición de sus jerarquías, liderazgos, alianzas y procedimientos.

En ese sentido, la idea del empate catastrófico, hoy, no es utilizable como lo era hace cuatro años, porque lo que ahora tenemos no confronta (aún) dos proyectos de poder con fuerzas de movilización y liderazgo nacionales. Lo que hoy tensiona al país es la confrontación entre un sentido común prevaleciente como

Álvaro García Linera

proyecto nacional general, estatal y, por otra parte, resistencias locales, con fuerzas de movilización y liderazgos estrictamente locales también. Quizás en algún momento esas resistencias locales podrían proyectarse como un proyecto nacional alternativo.

Teóricamente esto puede suceder pero, hoy por hoy, son meramente resistencias locales de atrincheramiento y de defensa del poder, de la riqueza y la propiedad local de las élites anteriormente desplazadas del poder nacional y que ahora se han replegado a las regiones. Ciertamente se trata de élites con mucha capacidad de movilización regional, con un discurso de libre mercado timorato amorfo y confuso, pero que todavía no son portadoras de un nuevo proyecto de Estado. Hay empate catastrófico solamente cuando hay dos proyectos nacionales de sociedad confrontados, lo que ahora hay es un proyecto de sociedad con resistencias locales fuertes de protección de la propiedad y del poder de las elites desplazadas del ámbito central.

Finalmente quisiera regresar nuevamente al concepto del punto de bifurcación.

Retomamos este concepto del profesor de física Ilya Prigogine, quien estudio los sistemas alejados del punto de equilibrio. Él vio que a partir de cierto tiempo, estos sistemas alejados del punto de equilibrio pueden dar lugar a un nuevo orden del sistema. A este punto de conversión del desorden del sistema en orden y estabilización del mismo, Prigogine lo llamó “punto de bifurcación”⁴⁷⁷.

En el ámbito de las estructuras estatales en crisis (“sistemas alejados del equilibrio”), éstas se caracterizan por la inestabilidad y la confrontación política. Se trata de auténticos, generalizados y desnudos momentos de lucha por el poder político. Pero en la medida en que ninguna sociedad puede vivir perpetuamente en un estado de lucha generalizada y antagonizada por el poder, la sociedad, más pronto o más tarde, ha de inclinarse por la estabilización del sistema o construcción de un orden estatal que devuelva la certidumbre a las estructuras de dominación y conducción política. A este momento histórico-específico y fechable, a partir del cual el Estado se estabiliza, le denominamos “punto de bifurcación”

Ésta es una idea que la trabajamos, quizás con otras palabras, hace veinte años, para describir el momento excepcional, de fuerza militar y moral, de consolidación conservadora del poder de Estado cuando se dio la Marcha por la Vida de los trabajadores mineros en contra de las políticas de cierre de minas decretada por el gobierno de Paz Estenssoro.

⁴⁷⁷ *Self-organization in nonequilibrium Systems*, junto a John Wiley, 1989 (Cambridge: MIT PRESS).

Crisis estatal y época de revolución

Los mineros hicieron un último esfuerzo de reconstituir los pactos de abril. Utilizaron la movilización de masas y la respuesta fue el cerco militar. No hubo enfrentamiento ni muertos. Era tal la superioridad militar del gobierno y tal la inermidad política y moral de los mineros que venían a reclamar el pacto estatal del cincuenta y dos a un gobierno y un Estado que había enterrado la idea de pactos sociales, que no hubo necesidad de disparar una sola bala para consolidar el repliegue de los mineros.

La derrota de los mineros en la Marcha por la Vida, su repliegue, sin ofrecer más resistencia que el irse a sus casas sin dar batalla, aceptando que se los relocalizara, marcó una época de abandono social. Luego, el país: las clases medias, los trabajadores, los fabriles, los maestros, absolutamente todos, reprodujeron este momento de bifurcación que es una especie de núcleo fundante de la lógica y de la personalidad de la correlación de fuerzas del Estado.

Con los mismos actores pero con resultados diametralmente opuestos, se dará el punto de bifurcación que dio paso al nacimiento del Estado del 52. Entonces, y tras siete años de crisis estatal, una victoria electoral escamoteada en 1951, la insurrección del 9 de abril de 1952 fue el punto de bifurcación del Estado nacionalista.

Entonces, el núcleo fundante del nuevo Estado fueron las milicias de obreros y campesinos armados cuyo estructura sindical triunfante marcó la presencia siempre belicosa de la plebe en un Estado ajeno pero pactante, hasta que vino el nuevo Estado neoliberal que puso fin a cualquier pacto que no sea el de elites políticas cerradas y endogámicas.

En septiembre de 1986 en cambio, los mineros regresaron a sus casas con el cadáver del Estado del 52, en tanto que el Estado neoliberal se consolidó mediante un hecho de demostración de fuerza militar y política que no pudo ser discutida sino hasta catorce años después, en abril de 2000.

Si uno revisa los momentos de la construcción de los nuevos Estados —el nacionalista, el republicano, la comuna, el soviético—, cualquier Estado, siempre, ha tenido un *punto de bifurcación* de su estructura de poder.

Ahora, este punto de bifurcación tiene varias características; la primera es un momento de fuerza, no es un momento de diálogo ni necesariamente un punto violento, pero sí es un momento donde se tienen que exhibir desnudamente las fuerzas de la sociedad en pugna, se tienen que medir las capacidades y en ello definir la suerte definitiva e irreversible de cada uno de los contrincantes.

En segundo lugar, el punto de bifurcación es un momento donde las antiguas fuerzas asumen su condición de derrota o donde las nuevas fuerzas ascen-

Álvaro García Linera

dentes asumen su imposibilidad de triunfo y se repliegan. No hay espacio para equilibrio. Es un momento donde una fuerza social o un bloque de fuerza asume el mando reconocido por los que aceptan obedecer, dando lugar a una nueva complacencia moral entre gobernantes y gobernados.

En tercer lugar, es un momento donde la política, parafraseamos a Foucault, es la continuación de la guerra por otros medios y no a la inversa, es un momento donde tiene más razón Foucault que Rousseau⁴⁷⁸. En otras palabras, el punto de bifurcación es un momento donde la situación de todos se dirime en base al puro despliegue de correlación de fuerzas sin mediación alguna: fuerzas materiales, simbólicas y económicas.

Ahora la pregunta que uno puede hacerse es: ¿En qué momento será el cierre del punto de bifurcación de la actual transición estatal en el país? De momento se podría decir que estamos atravesando los momentos más intensos de este punto de bifurcación estatal, lo que permite pensar que a corto o mediano plazo o el nuevo Estado se consolida ensamblando el sistema político con la estructura de poder económica y simbólica de la sociedad y, entonces, ya se reacomoda gradualmente el resto; o las fuerzas del nuevo bloque dominante van para atrás y se reestablece el antiguo bloque dominante con nuevos rostros, nuevos símbolos movilizados y antiguas relaciones políticas de dominación.

Inicialmente habíamos creído que era posible la construcción del Estado mediante mecanismos dialógicos y pactados y, de hecho, seguimos apostando a ello en la idea de un punto de bifurcación de carácter democrático y por aproximaciones sucesivas. Pero las lógicas de la razón y de la historia nos hacen pensar que cada vez, más bien, se habrá de llegar más a un momento de tensionamiento de fuerzas, al punto de bifurcación, y habrá que ver qué sucede. Creo que en el caso de Bolivia, este momento está más cerca de lo que parece. Pero en todo caso, el punto de bifurcación y su cualidad van a definir la personalidad y la cualidad del nuevo Estado hacia el porvenir.

La Paz, agosto de 2008

⁴⁷⁸ *Microfísica del poder*, 2005 (Madrid: la Piqueta).